

E.E.T.P

Nº 285

HISTORIA

3º año

La organización del Estado nacional (1862-1880)

La centralización de la autoridad política

Entre 1862 y 1880, se consolidó la autoridad del Estado nacional; y Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda se sucedieron en el cargo de presidente de la República. Durante este período, el gobierno central fue asumiendo y concentrando muchas funciones que, hasta entonces, tradicionalmente, ejercían los poderes locales. Los distintos presidentes impulsaron la centralización de la autoridad política a través de distintas acciones: algunas de las más importantes fueron la formación de un Ejército nacional, que garantizó la autoridad del Estado sobre los cuerpos militares de las provincias; la organización de un sistema de rentas y un aparato recaudador de impuestos de alcance nacional; la organización del sistema bancario y la centralización de la emisión monetaria. También se consolidó un sistema jurídico, a través de la elaboración y sanción de los Códigos Civil, Penal y Comercial, y la creación de la Corte Suprema de Justicia. Al mismo tiempo, el Estado fomentó la inmigración extranjera y favoreció el desarrollo de las comunicaciones y de los transportes, para hacer efectiva la integración del territorio nacional.

A partir del establecimiento del Registro Civil de las Personas, la Ley de Matrimonio Civil, la administración estatal de los cementerios y la Ley de Educación Común, el Estado nacional se fue apropiando, también, de funciones tradicionalmente desempeñadas por la Iglesia católica.

Para lograr la obediencia del conjunto de la sociedad, las autoridades nacionales se propusieron vencer las resistencias, que el proceso de concentración del poder político generó en algunos sectores, combinando la violencia (la coacción) con la búsqueda de consensos —es decir, tratando de lograr acuerdos con los grupos dirigentes locales y los grupos de mayor poder económico—.

La organización de los poderes de gobierno

En 1862, poco tiempo después de la asunción de Mitre a la presidencia, comenzaron a funcionar la Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores previstos por la Constitución de 1853; se completó así la división de los poderes de gobierno. Mitre encargó a Dalmacio Vélez Sarsfield la redacción del Código Civil y del Código de Comercio, y dictó una ley que estableció que todos los territorios que quedaban fuera de los límites provinciales pertenecían a la nación.

En 1868, se planteó el conflicto político por la sucesión de Mitre en la presidencia. El Presidente saliente apoyaba a Rufino de Elizalde, su ministro de Relaciones Exteriores. Los grupos federales del litoral apoyaban a Urquiza, y los autonomistas porteños a Adolfo Alsina. Finalmente, la opinión de los jefes militares del ejército fue determinante y Domingo Faustino Sarmiento —que se encontraba en los Estados

Unidos— fue elegido presidente. Durante su gobierno, creó el Colegio Militar y la Escuela Naval, y el Estado nacional promovió la educación mediante la creación de escuelas primarias y normales, bibliotecas y algunos institutos de investigación —como el Observatorio Astronómico de Córdoba—.

En 1874, el tucumano Nicolás Avellaneda, con apoyo de los gobernadores del interior y del Ejército, sucedió a Sarmiento en la presidencia. Su elección fue rechazada por el Partido Nacionalista de Mitre. El ex presidente organizó y dirigió una revolución contra Avellaneda, pero fue derrotado por el Ejército nacional. Avellaneda continuó con las políticas de sus predecesores, y el gobierno nacional consolidó su poder.

Durante las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, el desarrollo del ferrocarril permitió la incorporación a la producción de vastas extensiones de tierra. Comenzaron a llegar cada vez más inmigrantes y más capitales extranjeros, y el Estado nacional impulsó proyectos de colonización agrícola.



Mitre, Alsina y Avellaneda disputándose el amor de la República. Una caricatura publicada en 1876, en el periódico satírico *Antón Perúero*.

a

Actividades

- ¿Por qué la sanción de una Constitución nacional no es una condición suficiente para asegurar la obediencia de la sociedad a las autoridades establecidas por el texto constitucional?

Las resistencias frente al avance del gobierno central

Después de Pavón y hasta 1880, distintos grupos sociales y políticos se negaron a subordinarse al gobierno central y lo enfrentaron. En el litoral y en el interior, la resistencia se expresó a través de alzamientos dirigidos por caudillos federales. Las llamadas *montoneras*, que contaban con el apoyo de los sectores más pobres de las provincias, exigieron la mejora de la grave situación económica y social que padecían las poblaciones provinciales. La producción artesanal del interior —la de tejidos era la más importante— estaba alejada de los puntos de contacto con el mercado externo y, además, no podía competir con los productos manufacturados extranjeros que ingresaban por el puerto de Buenos Aires. Las consecuencias de esta situación fueron la falta de trabajo y el empobrecimiento de la población.

Por otra parte, en Buenos Aires, el gobierno central enfrentó a los sectores autonomistas que se opusieron a la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Además de las rebeliones provinciales y de la oposición de los grupos autonomistas porteños, el gobierno federal participó en un conflicto internacional —la guerra del Paraguay— y organizó distintas acciones para frenar los avances de los indígenas en la frontera sur. La participación del Ejército nacional en estos conflictos consolidó y perfeccionó su organización, y lo transformó en un instrumento fundamental en el proceso de centralización de la autoridad.

La derrota de las montoneras federales

El 1863, el caudillo riojano Ángel Vicente Peñaloza, el "Chacho", encabezó un alzamiento contra el gobierno central. Después de sufrir una serie de derrotas, fue tomado prisionero y muerto a lanzazos por el coronel Pablo Irrazábal. Como forma de escarmiento, fue

degollado; y su cabeza fue expuesta en una pica, en la plaza del pueblo de Olta. Esta orden había sido dada por el responsable de la represión en el interior, el gobernador sanjuanino y miembro del Partido Liberal, Domingo F. Sarmiento, quien se había autoproclamado un "baluarte contra la barbarie".

Después de la muerte de Peñaloza, se produjeron otras revueltas en Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Corrientes y Catamarca. El último alzamiento federal de envergadura estuvo relacionado con la guerra del Paraguay. La contienda era muy impopular en el interior del país. Los caudillos federales se negaban a combatir contra el Paraguay, ya que lo consideraban un país hermano. La oposición popular a la guerra impulsó la rebelión. En 1866, el caudillo catamarqueño Felipe Varela, que había sido lugarteniente de Peñaloza, encabezó un nuevo alzamiento contra el gobierno nacional. Varela lanzó una proclama en la que proponía la unidad de los pueblos latinoamericanos contra las potencias extranjeras, defendía a Urquiza y acusaba a Mitre de *usurpar* el gobierno nacional. Varela fue derrotado definitivamente hacia el año 1870.

En la provincia de Entre Ríos, el caudillo Ricardo López Jordán se opuso al gobierno central. López Jordán, igual que Peñaloza y Varela, esperaba que Urquiza encabezara un ejército federal contra los liberales; pero el gobernador de Entre Ríos se mantuvo fiel a sus acuerdos con el gobierno central. En 1870, Urquiza fue asesinado; y la Legislatura provincial designó a López Jordán como gobernador. El presidente Sarmiento decretó la intervención de la provincia; López Jordán resistió, pero en 1871 fue derrotado. En 1873 y 1876, encabezó nuevos alzamientos contra las autoridades nacionales, pero fue vencido.



El 18 de noviembre de 1863, pocos días después del asesinato del Chacho Peñaloza, desde San Juan, Sarmiento escribió a Mitre: "No sé lo que pensarán con la ejecución del Chacho. Yo, inspirado por el sentimiento de los hombres pacíficos y honrados, aquí, he aplaudido la medida, precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro y ponerla en expectación, las chusmas no se habrían quietado en seis meses [...]. El derecho no rige sino con los que lo respetan, los demás están fuera de la ley [...]". En la imagen, montoneros del Chacho Peñaloza sometidos en 1862.

La "conquista del desierto" y la integración del territorio

La centralización de la autoridad del Estado se manifestó también en la integración del territorio nacional y el afianzamiento de su soberanía en las zonas más alejadas. Con estos objetivos, las autoridades nacionales se propusieron controlar definitivamente los avances de los indígenas sobre la frontera en el sur. Los terratenientes bonaerenses, que tenían cada vez mayor influencia en el gobierno, estaban directamente interesados en la expulsión de los indígenas y en la explotación económica de esas tierras.

Durante la presidencia de Avellaneda, el ministro de Guerra, Adolfo Alsina, planificó y ordenó la construcción de una línea de fuertes y fortines unidos entre sí por una extensa zanja, para impedir el paso de los malones indígenas y del ganado que estos se llevaban. Pero el plan de Alsina no contó con el acuerdo del general Julio A. Roca, uno de los jefes militares más importantes. Roca sostenía que los fuertes fijos constituían un riesgo para la disciplina de los soldados y dificultaban el control. A juicio del general, "el mejor sistema" para "concluir con los indios" era "extinguirlos o arrojarlos al otro lado del Río Negro", a través de una "guerra ofensiva".

Roca, designado ministro de Guerra luego de la muerte de Alsina, puso en marcha su plan, que se proponía la eliminación de los indígenas que habitaban entre la frontera y los ríos Negro y Neuquén. Para alcanzar sus objetivos, Roca contó con nueva tecnología, como el telégrafo y las armas de repetición; suprimió la pesada artillería y aumentó la cantidad y la calidad de las tropas. Hacia 1881, había logrado el sometimiento de 14.000 indígenas y la incorporación de 15.000 leguas de tierra al territorio sujeto al control del Estado nacional.

La llamada *conquista del desierto* favoreció a los terratenientes bonaerenses, que pasaron a controlar las tierras arrebatadas a los indígenas y las organizaron como enormes latifundios.

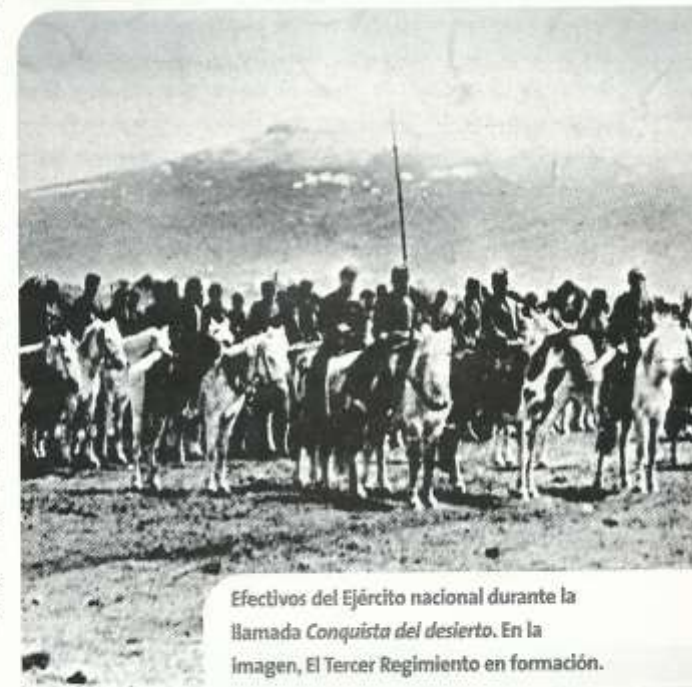
La "cuestión Capital" y la subordinación de los autonomistas porteños

Los sectores autonomistas porteños, que contaban con el apoyo de los terratenientes y los comerciantes de Buenos Aires, constituyeron un serio obstáculo para el proceso de centralización de la autoridad del Estado nacional.

En 1867, las autoridades nacionales devolvieron a las autoridades provinciales la jurisdicción sobre el municipio de la ciudad de Buenos Aires. Desde entonces y hasta 1880, el gobierno nacional, presidido por Sarmiento y luego por Avellaneda, se mantuvo en calidad de huésped del gobierno provincial. El conflicto finalmente se resolvió por la fuerza. En junio de 1880, las milicias provinciales de

Buenos Aires, organizadas por el gobernador Carlos Tejedor, enfrentaron a las tropas del Ejército nacional, dirigidas por el general Julio A. Roca, ministro de Guerra de Avellaneda y presidente electo. El Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional trasladaron su sede al pueblo de Belgrano. Luego de violentos enfrentamientos entre las tropas que respondían al gobernador y el Ejército nacional, Tejedor fue derrotado y renunció a su cargo, y la Legislatura provincial se disolvió. El general Mitre se hizo cargo de las fuerzas de Buenos Aires e inició negociaciones con las autoridades nacionales.

Finalmente, el 20 de septiembre de 1880, la nueva Legislatura provincial sancionó la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, Buenos Aires fue la Capital Federal de la República Argentina.



Efectivos del Ejército nacional durante la llamada *Conquista del desierto*. En la imagen, El Tercer Regimiento en formación.

a

Actividades

- Reunidos en pequeños grupos, discutan las siguientes cuestiones:
 - ¿Qué significado tenía la afirmación realizada por Domingo F. Sarmiento: "El derecho no rige sino con los que lo respetan, los demás están fuera de la ley"?
 - ¿Por qué las autoridades nacionales estuvieron dispuestas a negociar con los autonomistas porteños y reprimieron a los caudillos federales del interior?

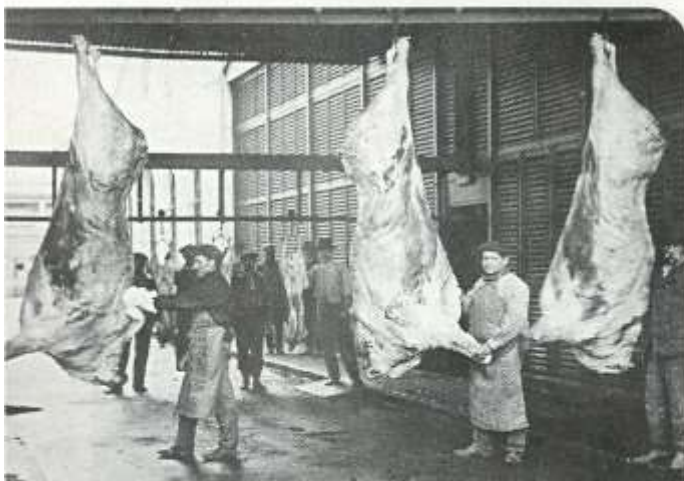
La modernización de la economía y la sociedad

La inserción de la economía argentina en el mercado internacional

Entre los años 1862 y 1880, a medida que se centralizaba la autoridad política y se consolidaba el poder del Estado nacional, los países industrializados comenzaron a requerir volúmenes cada vez mayores de materias primas y alimentos.

Para satisfacer la demanda del mercado internacional, los grupos de terratenientes más poderosos comenzaron a organizar la economía argentina como complemento de las economías de las sociedades industriales, particularmente de la inglesa. Las decisiones tomadas con este objetivo tuvieron como resultado la conformación de un mercado de tierras, un mercado de trabajo y de un mercado de capitales. Desde entonces, las tierras, el trabajo (la mano de obra) y el capital se transformaron en mercancías que circulaban libremente y que se podían comprar y vender.

El mercado de tierras se conformó con las tierras conquistadas a los indígenas y las hasta entonces consideradas tierras públicas. El mercado de trabajo se integró con mano de obra nativa —los habitantes de las zonas rurales, denominados *gauchos*, fueron obligados a abandonar su tradicional modo de vida errante— y con la fuerza de trabajo de los inmigrantes. El mercado de capitales se constituyó a partir del ingreso de capitales extranjeros, provenientes en su mayoría de Inglaterra, en forma de empréstitos —préstamos al gobierno—, primero y, luego, en forma de inversiones directas —destinadas a la construcción de la red ferroviaria y a la organización de compañías colonizadoras de tierras—. Sobre estas bases, se organizó una nueva economía exportadora de productos primarios.



Los cambios en la producción agropecuaria

Entre 1880 y 1910, la economía argentina se integró definitivamente al mercado mundial a través de la exportación en gran escala de carnes y cereales. Estas nuevas producciones reemplazaron las exportaciones tradicionales de cueros y lanas.

La producción de ovinos fue la actividad ganadera más importante de la Argentina hasta fines del siglo XIX. A partir de 1895, las exportaciones de ganado vacuno en pie a Inglaterra comenzaron a desplazar las de carne ovina.

El desarrollo agrícola se vio favorecido por el aumento de la demanda internacional y por el crecimiento de las ciudades. En muy poco tiempo, la Argentina pasó de importar harinas a exportar más de un millón de toneladas de cereales —maíz y trigo, fundamentalmente—. La expansión cerealera se inició en las colonias agrícolas de Santa Fe y se extendió luego en la provincia de Buenos Aires.

A principios del siglo XIX, la invención del frigorífico generó la posibilidad de exportar carnes congeladas al mercado europeo, primero ovina y luego vacuna. Los terratenientes debieron mejorar la calidad del ganado productor de carne para la exportación. Los rodeos fueron mejorados a través de la alimentación y la cruce con razas europeas.

Para alcanzar estos objetivos, los terratenientes de la provincia de Buenos Aires comenzaron a explotar sus propiedades a través del sistema de arrendamiento, que combinaba el desarrollo de la agricultura con las necesidades de refinamiento del ganado destinado a la exportación.

Los arrendatarios —productores, muchos de ellos, inmigrantes, que alquilaban las tierras— estaban obligados a sembrar un año lino, otro trigo y el tercero, alfalfa. De este modo, los riesgos de poner en producción la tierra virgen recaía sobre los arrendatarios. Después del tercer año, en general, los contratos no se renovaban; y los campos sembrados con alfalfa proveían el forraje adecuado para el ganado de calidad que ya no podía criarse con pasturas naturales.

Obremos trabajando en un frigorífico, a principios del siglo XX. La carne para exportación se cortaba y embalaba en bolsas especiales. Los mercados europeos exigían las máximas garantías sanitarias.

La inmigración extranjera

La inmigración extranjera aumentó a partir de 1852, pero se tornó vertiginosa a partir de 1880, cuando el desarrollo de las nuevas producciones agropecuarias y las nuevas actividades urbanas generaron el aumento de la demanda de mano de obra.

Durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, el Congreso Nacional dictó la Ley 817, que reglamentó la entrada de extranjeros al país. Desde entonces, el ritmo y la magnitud de la inmigración extranjera transformaron profundamente la organización y la cultura de la sociedad argentina. Entre 1869 y 1930, el aporte migratorio provocó un crecimiento demográfico del 60%.

En una primera etapa, el Estado o particulares con algún grado de apoyo gubernamental asumieron la responsabilidad de la organización del proceso migratorio. En Santa Fe, Entre Ríos y, en menor medida, en la provincia de Buenos Aires, se fundaron colonias agrícolas, habitadas por suizos, alemanes, franceses y judíos. Posteriormente, la mayoría de los inmigrantes comenzaron a llegar espontáneamente; y la intervención del Estado se limitó a la protección y al fomento de la inmigración. La Ley 817 instrumentó algunos mecanismos de promoción de la inmigración europea; por ejemplo, la instalación de oficinas y consulados en los países europeos, el otorgamiento de pasajes gratuitos, el alojamiento temporario a cargo del Estado en el Hotel de Inmigrantes al arribar a Buenos Aires y los traslados al interior del país.

Hasta el año 1880, sin embargo, el saldo de entradas y salidas era muy bajo. La mayoría de los inmigrantes que ingresaban a la Argentina regresaba a sus países de origen después de ejercer algún empleo temporario. Pero durante las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, la situación cambió: fueron cada vez más los extranjeros que permanecieron en el país.

Entre 1875 y 1914, la Argentina recibió cinco millones de inmigrantes, aproximadamente el 14% del movimiento migratorio mundial total. De ellos, más de 2,5 millones se radicaron en forma definitiva. La mayoría de los inmigrantes eran italianos y españoles, aunque también llegaron eslavos, rusos, sirios y portugueses. Entre 1860 y 1890, llegaron italianos oriundos de las regiones del norte. Posteriormente, arribaron nuevos contingentes provenientes del sur de la península. El mayor número de los españoles llegó entre 1905 y 1910.

Al arribar al puerto de Buenos Aires, la mayoría de los inmigrantes declaraban ser agricultores. Pero muy pocos se convirtieron en dueños de una parcela de tierra. Hacia 1880, los grandes terratenientes habían acaparado la mayor parte de las tierras en la región pampeana. Además, los inmigrantes carecían de capitales y las tierras eran caras. Como consecuencia de las dificultades para acceder a la propiedad de la tierra y las posibilidades que ofrecían las grandes ciudades, la mayoría de los inmigrantes se radicó en los centros urbanos. Hacia 1910, el 50% de los habitantes de Buenos Ai-



Los conventillos, siempre cercanos al empleo —real o potencial—, se convirtieron en el prototipo de la vivienda popular y en el ámbito de socialización e intercambio de ideas y costumbres de los trabajadores. En la imagen, el patio de un conventillo porteño, en los primeros años del siglo XX.

res y el 40% de los habitantes de Rosario eran extranjeros. Este movimiento inédito de personas desbordó la capacidad de las ciudades que no contaban con la infraestructura necesaria para alojar a los recién llegados.

Hacia el año 1870, las viejas casonas de los barrios del sur de Buenos Aires, abandonadas por sus propietarios después de las epidemias de tifo y fiebre amarilla, fueron adaptadas y convertidas en viviendas colectivas —a las que se accedía pagando un alquiler por pieza—. Los llamados *conventillos* se transformaron en un negocio excepcional para los dueños de inquilinatos. Las condiciones sanitarias eran malas, ya que las ordenanzas municipales sobre normas de higiene no se cumplían. Por otra parte, el precio de los alquileres significaba alrededor del 30% —a veces más— de los ingresos de los trabajadores.

a

Actividades

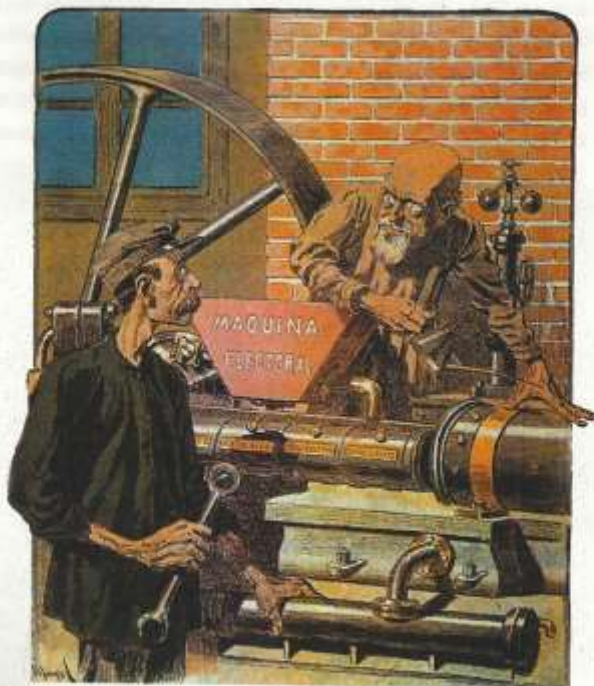
- ¿Qué características de la organización de la economía argentina influyeron en la distribución y la localización de los inmigrantes que llegaron a la Argentina durante la segunda mitad del siglo XIX?
- Vuelvan a leer el relato presentado en las primeras páginas del capítulo y comenten cuáles eran las principales preocupaciones y expectativas que tenían los inmigrantes a principios del siglo XX.

Organización y crisis del régimen oligárquico (1880-1916)

El funcionamiento del sistema de gobierno oligárquico

En 1880, Julio A. Roca asumió como presidente de la República. En su primer discurso dijo: "En adelante, libres ya de las preocupaciones y de las conmociones internas, que a cada momento ponían en peligro todo, hasta la integridad de la República, podrá el gobierno consagrarse a la tarea de la administración y las labores fecundas de la paz; y cerrado de una vez para siempre el período revolucionario, que ha detenido constantemente nuestra marcha regular, en breve cosecharemos los frutos de nuestro acierto y entereza". De este modo, Roca y los grupos que lo apoyaban sintetizaron los objetivos del nuevo gobierno en el lema "paz y administración".

Los grupos dirigentes adherían a los principios del liberalismo político que habían sido el fundamento de la Constitución nacional sancionada en 1853; es decir, a la soberanía popular como fuente de la autoridad política, a la forma representativa de gobierno, y a la división de los poderes de gobierno. Pero, al mismo tiempo, estos grupos entendían que los contenidos de la Constitución no reflejaban las prácticas y las costumbres reales de la sociedad argentina de la época, sino que marcaban un rumbo y expresaban un proyecto para el futuro del país. Por esta razón, estuvieron de acuerdo en postergar la aplicación de algunos principios constitucionales hasta que cambiaran algunas condiciones del estado de la sociedad.



De acuerdo con estas ideas, el régimen político se mantuvo organizado según las reglas de la democracia política—es decir, los ciudadanos ejercían el derecho de sufragio y elegían representantes—. Pero, al mismo tiempo, se fue consolidando un sistema de gobierno que aseguraba el ejercicio del poder político a una minoría y restringía la participación política de la mayor parte de la sociedad argentina. Por esta razón, este sistema de gobierno fue caracterizado como *oligárquico*. Este calificativo deriva del concepto de *oligarquía*, palabra de origen griego que significa 'gobierno de unos pocos'.

A partir de 1880, en la Argentina, el poder político fue controlado en forma exclusiva por algunos miembros del grupo social con mayor poder económico—integrado por los grandes terratenientes y comerciantes exportadores—. Estos se consideraron *los más aptos* para ser gobernantes, no sólo por su poder económico sino, además, por su educación y su preparación para ejercer cargos públicos.

El funcionamiento del sistema de gobierno oligárquico estuvo basado en el control del acceso a los cargos de gobierno y de la administración, y en el fraude electoral. Los integrantes del grupo gobernante, nucleados en el Partido Autonomista Nacional (PAN), elegían a las personas destinadas a ocupar los cargos públicos. En los hechos, eran los miembros de esta reducida élite política quienes ocupaban, sucesivamente, todos o el mayor número de los cargos de gobierno más importantes: diputado nacional, senador nacional, ministro del Poder Ejecutivo Nacional, gobernador y presidente o vicepresidente. El PAN controlaba, además, la sucesión presidencial. La Constitución nacional de 1853 establecía la elección indirecta del presidente y vice; es decir, los ciudadanos elegían electores, quienes, a su vez, elegían al presidente. Pero, en la práctica, el presidente designaba a su sucesor. La Cámara de Senadores, que reunía a los representantes de las provincias, se transformó en un espacio privilegiado para los acuerdos entre las élites políticas de todo el país.

Al mismo tiempo, el grupo gobernante organizó diversas formas de fraude electoral, como método para excluir a la oposición política no tolerada y a las mayorías populares. De acuerdo con la Constitución nacional y las sucesivas leyes electorales que, desde 1863, nunca restringieron el sufragio, en las elecciones podían participar todos los varones argentinos mayores de 21 años. Pero el gobierno oligárquico alteraba el registro electoral y organizaba el voto colectivo, el voto doble, la repetición del voto y la compra de sufragios.

Eduardo Wilde, ministro de Educación de Julio A. Roca, afirmó que el sufragio universal significaba el "triunfo de la ignorancia universal". En la imagen, una caricatura publicada en la tapa de la revista *Caras y Caretas*, el 18 de noviembre de 1899. El texto que la acompañaba decía: "Al sufragio esta máquina se aplica / y es de tal precisión su mecanismo / que todo lo que en ella se fabrica / nos viene a resultar siempre lo mismo". El viejo mecánico que acciona la máquina tiene los rasgos de Julio A. Roca.

La Generación del 80. Sus ideas y proyectos

Los miembros de la elite que ocuparon cargos de gobierno y en la administración pública entre 1880 y 1890, durante las presidencias de Roca y Miguel Juárez Celman, compartieron un conjunto de principios e ideas que se convirtieron en los objetivos de las acciones de gobierno que llevaron a la práctica. Aunque entre ellos también se registraron diferencias de opiniones sobre algunos temas, todos impulsaron un proyecto de desarrollo que, desde 1880, caracterizó la organización de la economía y de la sociedad, e influyó en el desarrollo posterior de la Argentina. Este grupo de dirigentes fue conocido como la *Generación del 80*.

El programa de la Generación del 80 se puso de manifiesto a través de los discursos políticos y parlamentarios, los mensajes presidenciales, la correspondencia y las notas periodísticas. Pero nunca fue enunciado explícitamente en forma integral.

Los miembros de este grupo dirigente pensaban que la Argentina debía imitar los avances de los países europeos, y muchos de ellos menospreciaron algunas de las costumbres y tradiciones autóctonas. Desde el punto de vista político, fueron conservadores, ya que consideraban que los asuntos políticos estaban reservados a la minoría, culta y rica, de la que formaban parte. Por esta razón, estuvieron de acuerdo en organizar una democracia restringida y se opusieron al sufragio universal. Al mismo tiempo, se propusieron extender la educación e impulsaron el desarrollo de la ciencia.

Desde el punto de vista económico, fueron liberales. Partidarios del librecambio, buscaron profundizar los lazos con Inglaterra. Impulsaron la inmigración y fomentaron las actividades agropecuarias. Concretaron muchos de los proyectos elaborados en la Argentina desde 1862.

La Generación del 80 se caracterizó por una actitud laica y secularizadora. Durante las presidencias de Julio A. Roca y Miguel Juárez Celman, se dictaron las leyes de Educación Común, la de Registro Civil y la de Matrimonio Civil. Estas leyes hicieron responsable al Estado de importantes funciones hasta entonces realizadas por la Iglesia católica, y generaron un serio conflicto con la jerarquía eclesiástica. De todos modos, los hombres del 80 no fueron antirreligiosos; además, pensaban que la religión podía ser utilizada como un mecanismo de control sobre los sectores populares. En la imagen, asistentes al Congreso Pedagógico Internacional de 1882.

Los hombres de la Generación del 80 elaboraron una visión del mundo —que se propusieron difundir y generalizar—, y organizaron las instituciones públicas con el objetivo de integrar al conjunto de la sociedad. A través de la obligatoriedad de la educación básica y el servicio militar, buscaron homogeneizar culturalmente a los inmigrantes extranjeros y a los sectores de población criolla.

El espectacular auge de la economía exportadora de productos primarios, que se registró durante las últimas décadas del siglo XIX, permitió al grupo dirigente sostener con hechos concretos su idea de que el desarrollo del capitalismo era el motor que impulsaba un *progreso indefinido* y guiaba a la sociedad hacia un valor cultural que, desde su óptica, era indiscutible: *la civilización*. A partir de estas ideas, se propusieron *erradicar* las *herencias* materiales, jurídicas, políticas e ideológicas —a las cuales el grupo dirigente calificó como *rémoras*— de las tradiciones hispánica e indígena, que desde su punto de vista dificultaban la imposición del *orden* y obstaculizaban el avance del *progreso*.

a

Actividades

- ¿Qué relación había para la elite dirigente entre los conceptos de paz y administración y de orden y progreso?



Los cuestionamientos al régimen oligárquico. El nacimiento de la Unión Cívica Radical

La revolución de 1890

Julio A. Roca tuvo una fuerte intervención en la designación del ex gobernador de Córdoba, Miguel Juárez Celman, como su sucesor en la presidencia. Durante el gobierno de Juárez Celman, el crecimiento de las exportaciones y de la economía argentina fue vertiginoso. El gobierno nacional tomó medidas que alentaron el ingreso de los capitales extranjeros y favorecieron el desarrollo de distintas actividades especulativas. Al mismo tiempo, el Congreso nacional otorgó concesiones para el trazado de vías férreas en forma indiscriminada. El Estado garantizó un 5% de interés sobre el monto de las inversiones, y se generalizó el favoritismo político. Hubo, además, un auge en la construcción de edificios públicos y privados. En 1889, ingresaron al país 250.000 inmigrantes. Ese mismo año, el gobierno expuso su reciente opulencia en la Exposición Universal de París.

Pero el ritmo de la expansión se detuvo abruptamente. La caída de los precios de los productos primarios argentinos provocada por una crisis internacional mostró la vulnerabilidad de la economía argentina. La combinación del descenso de los precios internacionales de las exportaciones argentinas con el fuerte endeudamiento externo (la Argentina había tomado muchos créditos) provocó la cesación de los pagos. Es decir, el país no pudo hacer frente a sus compromisos con los acreedores externos. La escasez de divisas provocó el aumento del precio del oro y la depreciación del peso. En consecuencia, se generó inflación, y la crisis económica se agravó. La crisis económica aceleró la crisis política.

En 1889, Leandro N. Alem junto con algunos grupos de jóvenes universitarios y viejos políticos, como Bartolomé Mitre, impulsaron la conformación de una nueva fuerza política, la Unión Cívica de la Juventud. Esta se integró como una coalición muy amplia de sectores opositores al gobierno de Juárez Celman: en ella confluyeron antiguos miembros del PAN, grupos de liberales liderados por

Mitre, grupos católicos y una parte de la juventud universitaria. La Unión Cívica impulsó nuevas formas de participación política a través de grandes actos, denominados *mitines*, en los que la población podía exteriorizar su repudio al gobierno.

Los sectores del PAN liderados por Julio A. Roca y el vicepresidente Carlos Pellegrini coincidían con los opositores en la necesidad de acabar con la corrupción administrativa del gobierno de Juárez Celman, pero aspiraban a retomar el control del gobierno y garantizar la continuidad del régimen oligárquico. La Unión Cívica, sobre todo los sectores liderados por Alem, buscaba reformar el sistema político.

El 26 de julio de 1890, la Unión Cívica, con el apoyo de un sector del Ejército, protagonizó un alzamiento cívico-militar, conocido como la "Revolución del Parque". Pero, finalmente, para evitar que Alem se convirtiera en presidente si la revolución triunfaba, los militares y los sectores que respondían a Mitre sólo realizaron movimientos defensivos, y el levantamiento fue derrotado. De todos modos, el presidente Juárez Celman —sin apoyo del sector más poderoso del PAN— renunció y fue reemplazado por el vicepresidente Carlos Pellegrini.

La oposición al régimen: la Unión Cívica Radical

En 1891, Carlos Pellegrini acordó con Mitre y con Roca la sucesión presidencial que debía producirse en 1892. Los sectores de la Unión Cívica liderados por Alem e Hipólito Yrigoyen se opusieron al acuerdo y conformaron la Unión Cívica Radical (UCR).

El nuevo partido se opuso al régimen oligárquico. Recurrió a una táctica que combinaba la *intransigencia* —que significaba no acordar con el régimen y, en consecuencia, no aceptar cargos ni prebendas— con la *impugnación revolucionaria* —que consistía en organizar movimientos insurreccionales como forma de presionar al gobierno para que concediera elecciones libres y democráticas—.

En los años siguientes, en la UCR se debatieron dos tendencias: los *concurreristas*, que insistían en participar en las elecciones, y los *abstencionistas*, que se negaban a votar con el argumento de que no existían garantías contra el fraude. Después de 1904, Hipólito Yrigoyen se convirtió en jefe de la UCR y reafirmó la línea de intransigencia, abstención e impugnación revolucionaria.

En los primeros años del siglo xx, la UCR representó los intereses de las clases medias urbanas y rurales, pero entre sus dirigentes se destacaban políticos *disidentes* del régimen oligárquico. El programa de este partido político se limitaba a proclamar la honestidad administrativa y la pureza del sufragio.

En la imagen, radicales rosarinos exhibiendo su armamento, el 30 de julio de 1893.



Los conflictos sociales

Anarquistas, socialistas y sindicalistas

Durante las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, comenzó la organización de distintas asociaciones de trabajadores que tenían como objetivo luchar para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los obreros. Estas primeras organizaciones tuvieron diferentes orientaciones ideológicas y políticas.

El anarquismo fue difundido por los obreros inmigrantes que adherían a esta ideología. En 1901, un grupo de obreros de tendencia anarquista fundaron la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), primera central sindical que existió en la Argentina. Los anarquistas rechazaban la participación en el sistema político y la organización partidaria tradicional, y proponían la acción directa y la revolución para lograr mejoras y beneficios inmediatos. La principal consigna del anarquismo era "ni dios, ni amo, ni patria, ni Estado". En la primera década del siglo XX, el movimiento anarquista argentino fue uno de los más importantes e influyentes del mundo. Los anarquistas tuvieron adherentes entre los obreros de los pequeños talleres y de los servicios urbanos—como los portuarios, los mecánicos, los albañiles, los panaderos, los zapateros y los constructores de carruajes—.

En 1896, Juan B. Justo fundó el Partido Socialista. Este partido se proclamó defensor de los intereses de los proletarios, de acuerdo con las ideas de la doctrina marxista. Los socialistas consideraban que la lucha parlamentaria era la vía fundamental a través de la cual, gradualmente, se irían conquistando las reivindicaciones de los obreros argentinos—ocho horas de trabajo, aumento de salarios, reconocimiento del derecho de huelga, entre otras—. El socialismo tuvo el apoyo de los obreros más antiguos o especializados.

A partir de 1906, comenzó a diferenciarse una tercera corriente: el sindicalismo. Los sindicalistas se propusieron lograr objetivos específicamente económicos, a través de la huelga, forma de lucha que privilegiaban. Los sindicalistas tuvieron un importante apoyo entre los estibadores portuarios y los obreros de los talleres ferroviarios, gremios directamente relacionados con el comercio de exportación. Por esta razón, los sindicalistas tuvieron una mayor capacidad de negociación con el Estado.

La respuesta del Estado ante los conflictos políticos y sociales

A principios del siglo XX, algunos miembros de la elite dirigente comenzaron a preocuparse por los efectos que provocaba la exclusión política de amplios sectores de la población. En 1902, el presidente Roca impulsó una ley electoral redactada por su ministro del Interior, Joaquín V. González. Esta ley buscó ampliar la participación política sin poner en riesgo el sistema de gobierno oligárquico. Con



Manifestación socialista para protestar contra la Ley de Residencia.

este propósito, creó un padrón cívico permanente, estableció el control de los sufragios por los partidos políticos y fijó los 18 años como límite de edad para ejercer el voto. Además, modificó los distritos electorales, dividiéndolos en tantas zonas o circunscripciones como cantidad de diputados por elegir. Esta fue una modificación fundamental, porque permitió que, entre la mayoría de diputados oficialistas, fueran elegidos algunos representantes de la oposición.

En las elecciones a diputados realizadas en la Capital Federal en 1904, en la circunscripción del barrio de la Boca, fue elegido diputado el candidato del Partido Socialista, Alfredo L. Palacios.

Por otra parte, mientras la respuesta del Estado controlado por la elite oligárquica a la oposición política fue una apertura parcial, la respuesta a los movimientos de protesta y las huelgas protagonizados por los trabajadores—en particular, aquellos organizados por los anarquistas—fue la represión. En 1902, el Estado decretó el estado de sitio para garantizar el embarque de las exportaciones. En 1903, el Congreso nacional sancionó la llamada *Ley de Residencia*, que preveía la expulsión de los extranjeros que fueran acusados de *agitadores*. Sin embargo, al mismo tiempo que el gobierno justificaba la represión, algunos miembros del grupo gobernante comenzaron a considerar que la respuesta a la *cuestión social* no podía ser únicamente la represión. Durante la segunda presidencia de Roca, el Congreso Nacional convirtió en leyes algunos de los proyectos elaborados por la minoría de diputados socialistas. Pero la represión oficial a las huelgas, actos y manifestaciones obreras provocó más huelgas y más actos de violencia. En 1910, se produjo el pico más alto de huelgas y el gobierno sancionó la llamada *Ley de Defensa Social*, que estableció las penas correspondientes para una serie de acciones consideradas *disolventes* del orden establecido.

a

Actividades

- Identifiquen las principales diferencias entre las formas de lucha propuestas por anarquistas, socialistas y sindicalistas para lograr las reivindicaciones del movimiento obrero.

El radicalismo en el Gobierno (1916-1930)

El voto secreto y obligatorio

Los distintos gobiernos que se sucedieron desde la revolución de 1890 no contaron con la adhesión de la mayoría de la sociedad. Por el contrario, dependieron principalmente del apoyo del PAN y de los grupos de mayor poder económico.

Durante los primeros años del siglo xx, al pico de huelgas obreras, se sumaron las revoluciones radicales y los diversos movimientos de protesta protagonizados por los sectores populares urbanos y rurales. Entre estos últimos, los que mayor repercusión tuvieron fueron dos. Uno, la llamada Huelga de Inquilinos, protagonizada, en 1907, por los inquilinos de los conventillos de Buenos Aires que reclamaban una rebaja de los alquileres y el cumplimiento de las normas de salubridad. Y otro, el conflicto rural, conocido como el Grito de Alcorta, que estalló en 1912 en el sur de Santa Fe, protagonizado por colonos y arrendatarios que exigían una renegociación de los términos de los contratos de arrendamiento.

Frente a esta situación social, los miembros del grupo gobernante tuvieron distintas posiciones. El sector liderado por el ex presidente Julio A. Roca era partidario de mantener la exclusión política de la mayor parte de la sociedad y de reprimir las demandas sociales. Otro sector de la élite, que se nucleó en torno al presidente José Figueroa Alcorta, planteaba, en cambio, la necesidad de ampliar la participación política, terminar con el fraude y establecer un gobierno representativo.

En 1910, los sectores de la élite que impulsaban las reformas como una estrategia para descomprimir las tensiones lograron imponerse, y Roque Sáenz Peña fue elegido presidente. Sáenz Peña impulsó la sanción de dos leyes, aprobadas, finalmente, en 1912. Una ordenó la confección de un nuevo padrón electoral; la otra estableció el voto secreto y obligatorio, y un nuevo sistema de sufragio. La obligatoriedad del voto incorporó como electores a todos los varones nativos mayores de 18 años; pero mantuvo la exclusión de los extranjeros y de las mujeres.

Los sectores reformadores de la élite aspiraban a conformar un partido conservador que contara con el apoyo de los sectores populares. Pero no lo lograron, y la UCR se convirtió en la fuerza política más importante en el ámbito nacional. En 1916, Hipólito Yrigoyen fue elegido presidente de la República a través de la novedosa vía del voto popular. A partir de entonces, la élite oligárquica compartió con el radicalismo la dirección política del Estado, pero mantuvo su poder económico, social y cultural.

a

Actividades

- ¿Qué problemas solucionaba el voto secreto, y cuáles, el voto obligatorio?

El Gobierno de Hipólito Yrigoyen

Cuando Hipólito Yrigoyen se hizo cargo del gobierno, los conservadores mantenían el control en las dos cámaras del Congreso Nacional y de varios gobiernos provinciales. Recién a partir de 1918, la UCR tuvo la mayoría en la Cámara de Diputados; en cambio, nunca la consiguió en el Senado. Yrigoyen mantuvo en sus cargos a numerosos jefes militares y diplomáticos nombrados por gobiernos anteriores. Además, la mayoría de los ministros que integraron su gabinete eran miembros de la Sociedad Rural Argentina.

En 1916, la situación económica del país enfrentaba serias dificultades. El estallido de la Primera Guerra Mundial había afectado el desarrollo de la economía argentina. El comercio mundial se vio perjudicado por la contienda; y se redujo la llegada de productos industriales, de inmigrantes y de capitales extranjeros. Al mismo tiempo, cayeron las exportaciones. También se generó desabastecimiento en algunos rubros, como consecuencia de la interrupción de las importaciones, y aumentó el desempleo.

El Gobierno de Yrigoyen intentó limitar el poder de las empresas comercializadoras de cereales a través de la intervención del Estado. Al mismo tiempo, inició la organización de la Marina Mercante nacional para paliar la falta de bodegas que afectaba al comercio internacional como consecuencia de la guerra. El Presidente propuso limitar la expansión de los intereses británicos y alterar el trazado centralista de la red ferroviaria. Hacia el final de su mandato, en 1922, el Gobierno creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que centralizó la explotación del petróleo bajo el control del Estado.



Comodoro Rivadavia, 1918. Un río de petróleo avanza hacia tanques cercanos, ya que todavía no se habían construido cañerías adecuadas en la zona.

Las reformas económicas y políticas a favor de los sectores medios

El radicalismo no tenía un programa económico y social definido. Su principal propuesta consistía en la vigencia de la Constitución de 1853. Yrigoyen había definido a la UCR como la "causa" contra el "régimen", y había afirmado que, más que un partido, el radicalismo era un amplio movimiento nacional que nucleaba a distintos sectores sociales tras los objetivos de la "reparación moral" de las instituciones de la República, afectadas durante muchos años por el fraude y la corrupción administrativa.

La ambigüedad de estos principios tan generales tenía objetivos electorales, ya que la UCR pretendía captar el voto de diversos sectores sociales con intereses particulares contrapuestos. Los radicales sostenían —a diferencia de los conservadores— que el Estado debía intervenir en la resolución de los conflictos entre los grupos sociales. Asimismo, consideraban necesaria la intervención —limitada— del Estado en la economía. De este modo, el radicalismo rompió con las orientaciones más conservadoras de los dirigentes del régimen oligárquico, avanzó en la democratización del Estado y favoreció la participación política de los ciudadanos.

El Gobierno de Yrigoyen trató de compatibilizar los intereses de los grandes terratenientes con los de los sectores populares urbanos. Durante los primeros años de gobierno, se propusieron distintos proyectos tendientes a mejorar la situación de las clases medias urbanas —la base electoral de la UCR—, pero la mayoría conservadora en los cuerpos legislativos no los aprobó.

El radicalismo buscó afianzar y ampliar el apoyo de su base electoral a través de la expansión del empleo público y la utilización política de esta fuente de ingresos —por ejemplo, aumentando el número de empleados en la administración pública nacional e incrementando los salarios en algunas reparticiones.

Más información

El patronazgo estatal según un diario socialista

El diario socialista *La Vanguardia*, en su edición del 18 de enero de 1922, describió así el sistema de patronazgo estatal: "La inscripción en los registros del partido viene a ser [...] una especie de pasaporte o salvoconducto para llegar a cualquier puesto, sistema que, generalizado con el fin de dar ubicación en las oficinas públicas a las hordas famélicas de la 'causa', ha convertido a todas las reparticiones nacionales y municipales en otros tantos asilos de incapaces [...]".



Estudiantes reformistas izan la bandera argentina en el mástil de la Universidad de Córdoba en 1918.

La Reforma Universitaria

El acceso a las universidades públicas generó fuertes enfrentamientos entre las clases medias y los miembros de la elite. La obtención de un título universitario significaba, para los sectores medios, la posibilidad de ascenso social, ya que era el requisito necesario para ejercer las profesiones liberales.

En junio de 1918, los estudiantes de la Universidad de Córdoba organizaron huelgas que se extendieron a otras universidades del país. Los estudiantes reclamaban la modificación de los planes de estudio y eliminar la influencia de la Iglesia en la educación superior. Entendían que el sistema educativo vigente era anacrónico y que la formación de los docentes, que enseñaban y gobernaban la universidad, era deficiente.

Para cambiar esta situación, el movimiento llamado *reformista* propuso un nuevo sistema de gobierno universitario, organizado sobre los principios de la *autonomía universitaria* —es decir, el derecho de cada universidad a gobernarse a sí misma— y el *cogobierno* —es decir, la participación en el gobierno universitario de los docentes, los graduados y los estudiantes. También, reclamó la eliminación de las cátedras vitalicias, a cargo de profesores designados por el rector, y su reemplazo por profesores nombrados luego de la realización de concursos periódicos.

El movimiento de la Reforma se caracterizó, también, por su ideario romántico y laicista: defendió la libertad de opinión, el pluralismo ideológico y la gratuidad de la educación.

El Gobierno aceptó las demandas relacionadas con los criterios de ingreso, los cambios en los planes de estudio y los concursos docentes. También, se crearon nuevas universidades, hecho que amplió las posibilidades de acceso de los sectores medios a los estudios superiores.

La economía durante los Gobiernos radicales

Durante los primeros años del siglo XX, la economía agroexportadora registró sus índices de crecimiento más elevados. Durante este período, la Argentina se ubicó entre los primeros países exportadores de cereales y carnes. Por esa época, se generalizó la imagen de Argentina, granero del mundo.

Durante la década de 1920 se registró, además, una nueva fase de expansión de la ganadería. Por entonces, la Argentina se consolidó como país exportador de carne enfiada de alta calidad (*chilled*), destinada al consumo del sector de ingresos más altos del mercado inglés. Esta situación profundizó la diferenciación entre los grandes propietarios rurales. El aumento de las exportaciones de carne enfiada benefició mucho más a los invernaderos que a los criadores. Los primeros eran los dueños de grandes extensiones de tierras localizadas en las proximidades de los frigoríficos, dedicadas al engorde del ganado antes de ser vendido. Los campos de los criadores, en cambio, estaban más alejados de los frigoríficos, razón por la cual estos terratenientes tenían menor capacidad de negociación con los establecimientos procesadores.

Aunque se había llegado al límite de la frontera agraria de la época —es decir, ya no quedaban tierras fértiles para incorporar al proceso productivo—, durante la década de 1920, la cantidad de divisas producidas por las exportaciones se incrementó, como consecuencia del aumento de los precios internacionales de los productos agropecuarios exportados.

Por otra parte, las dificultades provocadas por la guerra para mantener las importaciones de manufacturas industriales favorecieron el desarrollo de algunas industrias dedicadas a sustituir

importaciones: es decir, a fabricar localmente algunos productos manufacturados que, hasta entonces, llegaban desde el extranjero. Pero, al finalizar la contienda, este incipiente desarrollo industrial se vio afectado por la falta de mecanismos de protección y de incentivos, necesarios para competir con los productos importados.

Después de la guerra, se diversificaron las inversiones de capital extranjero. Además de los capitales ingleses, llegaron también capitales estadounidenses y alemanes. También, se registró la llegada de una nueva oleada de inmigrantes extranjeros.

Más información

La política exterior de Yrigoyen

Durante la Primera Guerra Mundial, el Gobierno de Yrigoyen declaró la neutralidad argentina en el conflicto bélico.

Cuando un submarino alemán hundió dos buques mercantes argentinos, el Gobierno exigió explicaciones, una indemnización y un acto de desagravio al pabellón nacional. El Imperio Alemán tuvo que ceder ante el enérgico pedido de la Argentina. En la Liga de las Naciones, el Gobierno argentino impulsó la admisión de todos los países en pie de igualdad. Ante la negativa de las grandes potencias, Yrigoyen retiró la delegación nacional. También, condenó la invasión estadounidense a Santo Domingo.



Afiche de la Exposición Industrial de 1917.



En junio de 1917, dos buques argentinos, el *Oriono* y el *Toro*, fueron hundidos por submarinos alemanes. En la imagen, manifestación de protesta por el hundimiento del buque *Toro*. El público pedía a los sobrevivientes.

Las respuestas del Gobierno de Yrigoyen a los conflictos sociales

Hacia 1918, la situación económica mejoró: la producción ganadera registró una etapa de auge; y en las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, comenzaron a desarrollarse algunas industrias. Pero esta expansión no fue acompañada con mejoras en la situación de los trabajadores. Además, la inflación disminuía el poder adquisitivo de los salarios. En 1919, en Buenos Aires, los gremios ferroviarios y portuarios, y los trabajadores de los frigoríficos organizaron numerosas huelgas. Durante 1921 y 1922, los conflictos se multiplicaron en la Patagonia.

Frente a estos conflictos, el Gobierno radical tuvo una actitud ambigua. En algunas ocasiones, los chacareros y los peones rurales fueron reprimidos; otras veces, el Gobierno impulsó medidas que los favorecían. Por ejemplo, el Estado desarrolló algunos programas de colonización; el Banco Hipotecario otorgó créditos a los arrendatarios, y se revisaron concesiones de tierras fiscales. Sin embargo, la efectivización de muchas de estas medidas fue obstaculizada por los terratenientes.

Durante el Gobierno de Yrigoyen, en el movimiento obrero argentino, se consolidó la corriente sindicalista, más moderada y dispuesta a negociar con el Estado. Las posiciones *revolucionarias* y *antiestatistas* que habían predominado en el período anterior fueron perdiendo fuerza, aunque entre 1916 y 1922, los anarquistas protagonizaron huelgas muy importantes.

Yrigoyen combinó reformas legislativas con represión. En algunos conflictos, la intervención estatal favoreció a los trabajadores; y hubo un acercamiento entre el Gobierno y los gremios dirigidos por los sindicalistas. Una actitud similar se registró en los conflictos que afectaban a las empresas extranjeras. En otros conflictos, liderados por sectores anarquistas y socialistas o que afectaron a empresas de capital nacional, tal como sucedió durante la llamada *Semana Trágica*, en enero de 1919, la respuesta fue la represión.



Obreros y mujeres acompañando al cortejo fúnebre de los trabajadores muertos durante la represión de la huelga declarada en los Talleres Vasena en 1919.

De todos modos, los sectores patronales consideraron que las concesiones y la tolerancia del Gobierno radical hacia los trabajadores eran exageradas. Con el propósito de protestar contra las medidas que el gobierno tomara a favor de los obreros, algunos integrantes de los grupos de mayor poder económico se nuclearon en la *Asociación del Trabajo*. También organizaron la *Liga Patriótica*, que era un grupo paramilitar que utilizaba la intimidación y la violencia contra los trabajadores. El Gobierno no logró mantener una actitud independiente y, finalmente, cedió la iniciativa a los empresarios, a las Fuerzas Armadas y a los grupos paramilitares.

La "Semana Trágica" y las huelgas en la Patagonia

A fines de 1918, se declaró una huelga en el establecimiento metalúrgico Pedro Vasena e Hijos, ubicado en el popular barrio de Parque Patricios de la Capital Federal, en demanda de una jornada laboral de ocho horas y el pago de horas extras. En pocos días, otras fábricas se sumaron a la medida de fuerza. Presionado por los empresarios metalúrgicos, el Gobierno ordenó primero a la policía y luego al Ejército reprimir a los huelguistas. Los enfrentamientos se sucedieron durante varios días, y se registró casi un centenar de muertos. Estos hechos fueron llamados por los contemporáneos como la *Semana Trágica*.

En 1921 y 1922, Río Gallegos —en la actual provincia de Santa Cruz— fue el epicentro de las huelgas que afectaron al sur de la Patagonia. La principal actividad de la zona era la producción de lana. La falta de compradores y la gran cantidad de lana acumulada durante la guerra generó una crisis que afectó a los estancieros —ingleses en su mayoría—, a los comerciantes y a los peones. Los trabajadores, ante las malas condiciones de trabajo y la falta de pago, declararon una huelga que contó con el apoyo de los trabajadores de Río Gallegos, ligados al comercio y a los servicios. En el campo, se ocuparon estancias; y se tomaron rehenes. Los terratenientes presionaron al Gobierno; e Yrigoyen envió al coronel Benigno Varela al frente de tropas del Ejército. Inicialmente, este militar asumió una actitud negociadora; y los trabajadores obtuvieron un convenio que les otorgaba algunos beneficios. Pero los estancieros no cumplieron con el convenio. Los trabajadores volvieron a la huelga, y Varela inició una fuerte represión. Muchos trabajadores fueron fusilados.

a

Actividades

- Identifiquen las principales continuidades y rupturas que se registraron en la orientación de las políticas, en los distintos planos sociales, aplicadas por los Gobiernos oligárquicos que se sucedieron entre 1880 y 1916, y por el primer Gobierno radical.

Los tiempos de Marcelo T. de Alvear

Yrigoyen, igual que los políticos del régimen que tanto criticó, influyó en la sucesión presidencial. El viejo caudillo optó por Marcelo T. de Alvear, nieto de un general de la independencia y miembro de la elite oligárquica. Alvear, que durante el período presidencial de Yrigoyen había sido embajador argentino en París, no había participado en las luchas internas del partido.

Alvear asumió la presidencia en 1922 y, durante su gestión, se registró una importante expansión de la producción y el consumo. Se reactivaron las exportaciones y el flujo migratorio; también aumentaron las inversiones extranjeras, con una importante participación, en esta etapa, de capitales estadounidenses.

La gestión del presidente Alvear se diferenció de la de Yrigoyen en varios aspectos. Alvear estaba más ligado con los sectores más conservadores del radicalismo —representantes de los intereses de los terratenientes—, que querían limitar el gasto público. Esta medida afectaba a los sectores medios urbanos. Alvear revirtió algunas de las políticas de Yrigoyen a favor de las clases medias, pero el constante crecimiento de la economía que se acercaba al pleno empleo y la baja conflictividad social contribuyeron a paliar los efectos negativos.

Por otra parte, el Estado siguió interviniendo en los conflictos sociales e impulsó la elaboración de nuevas leyes laborales. Durante el Gobierno de Alvear se sancionaron, entre otras, una ley que establecía las condiciones de contrato de trabajo para los menores y una ley que prohibió el trabajo nocturno en las panaderías. También se sancionó una ley que establecía la jubilación universal y obligatoria, pero esta fue derogada como consecuencia de las presiones de las organizaciones patronales, fundamentalmente, de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Alvear se diferenció claramente de Yrigoyen en la orientación de la política exterior. La Argentina ingresó a la Liga de las Naciones e ignoró la invasión estadounidense a Nicaragua, repudiada por numerosas personalidades latinoamericanas, Yrigoyen entre otros, quienes, además, apoyaron la resistencia del pueblo nicaragüense encabezada por Augusto César Sandino.

Más información

Las relaciones entre Alvear y el movimiento obrero

Durante la década de 1920, en el movimiento obrero, se consolidó la tendencia sindicalista; y en 1922, se formó la Unión Sindical Argentina (USA). Por otra parte, en 1926, los socialistas organizaron la Confederación Obrera Argentina (COA), que se transformó en la central obrera más fuerte de la época. La consolidación de estas orientaciones moderadas en el movimiento obrero y la buena situación económica generaron la disminución de la combatividad obrera durante el segundo Gobierno radical. Alvear, de todos modos, también ordenó reprimir algunos conflictos, pero —al igual que Yrigoyen— alternó represión con búsqueda de consenso.

La división del radicalismo

En 1923, fue nombrado ministro del Interior uno de los más notables antiyrigoyenistas, Vicente Gallo, que intentó intervenir la provincia de Buenos Aires, un bastión yrigoyenista. Poco después, se debía discutir en el Senado la aprobación de los diplomas de los senadores por Jujuy; y el yrigoyenismo no dio quórum. Alvear presionó al vicepresidente Elpidio González —que respondía a Yrigoyen— para que intercediera ante los senadores, pero este se negó. El radicalismo, entonces, se dividió.

Los autodenominados *antipersonalistas* se diferenciaban muy poco en sus ideas y en sus prácticas políticas de los dirigentes que habían integrado los distintos Gobiernos oligárquicos. Solían designar a los seguidores de Yrigoyen como los *genuflexos*. Los *personalistas* o yrigoyenistas se identificaban con la figura del viejo caudillo y provenían, fundamentalmente, de los sectores medios urbanos. Acusaban a los antipersonalistas de acordar asuntos fundamentales con los conservadores. Yrigoyen comenzó a utilizar el término *contubernio* para señalar la alianza entre los antipersonalistas y los conservadores en contra de los intereses populares.



En su tapa del número del 1.º de marzo de 1924, la revista *Caretas* publicó la caricatura satírica sobre la división de la UCR "El payador antipersonalista". En ella se lee: "1.ª copla —Marcelo, ¡te adoro con frenesí! (en voz baja) (Hipólito me abraza; a quién adoro es a tí). 2.ª copla —Po' t'í, Hipólito, me abraza; a quién adoro es a tí) (Che Marcelo, no abraza; a quién adoro es a tí)".

El segundo Gobierno de Yrigoyen y el golpe de 1930

En las elecciones del año 1928, la fórmula encabezada por Hipólito Yrigoyen triunfó con 800.000 votos, el doble de la lista antipersonalista. Nunca antes un político había obtenido una cuota tan elevada de consenso electoral. A diferencia del año 1916, el radicalismo contó con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, además, ocho provincias quedaron a cargo de gobiernos radicales. La división del partido favoreció el protagonismo de dirigentes jóvenes, que dieron al segundo Gobierno de Yrigoyen un perfil más progresista.

Pero el crack de Wall Street y la crisis económica mundial que se siguió impactaron negativamente en la economía argentina. Bajaron los precios de los productos agropecuarios, y disminuyeron las exportaciones y las importaciones. La economía, organizada sobre la exportación de productos primarios, entró en una profunda crisis; la vulnerabilidad de la economía argentina se evidenció con claridad.

El Gobierno se vio obligado a reducir el gasto público; y hubo despidos en la administración pública, decisión que generó descontento entre los sectores medios urbanos. El desgaste del Gobierno —que no sirvió a dar las respuestas necesarias— fue vertiginoso. Los primeros días de septiembre de 1930, el ministro de Agricultura fue recibido con piedras y silbidos en la Sociedad Rural, demostración de que los terratenientes y los exportadores habían pasado a la ofensiva. Estos grupos comenzaron a buscar el apoyo del Ejército.

Entre los militares y en algunos sectores intelectuales y políticos, se consolidó un pensamiento antidemocrático que justificaba la intervención política de las Fuerzas Armadas con el fin de desplazar lo que llamaban *el gobierno del número o la tiranía de la chusma*. Algunos intelectuales, como el poeta Leopoldo Lugones, venían anunciando la *hora de la espada*, que acabaría con los males de la democracia, y presentaban a los militares como la *última aristocracia*.

Desde mediados de la década de 1920, en el interior de las Fuerzas Armadas, se venían desarrollando actividades conspirativas. En el Ejército, estas actividades se expresaron en las logias —como, entre otras, la Logia General San Martín. Por aquellos años, se destacaron dos figuras militares: el general José Félix Uriburu, de tendencia nacionalista y simpatizante del fascismo italiano, y Agustín P. Justo, ex ministro de Alvear y de tendencia liberal-conservadora.

El 5 de septiembre de 1930, Yrigoyen, que estaba enfermo, delegó el mando en el vicepresidente Martínez. El 6 de septiembre, una columna de cadetes del Colegio Militar al mando del general José Félix Uriburu, llegó a la Casa Rosada e intimó a Martínez para que entregara el gobierno en forma inmediata. Con este acto, los militares quebrantaron la Constitución y establecieron una dictadura militar. Los grupos conservadores que representaban los intereses de los terratenientes exportadores más poderosos retomaron el control del Estado.

Más información

El discurso de Ayacucho

En 1925, en Perú, se conmemoró el centenario de la batalla de Ayacucho. En esa oportunidad, el poeta Leopoldo Lugones, que integraba la delegación argentina, afirmó: "Señores: dejadme procurar que esta hora de emoción no sea inútil. Yo quiero arriesgar también algo que cuesta mucho decir en estos tiempos de paradoja literaria y de fracasada bien que audaz ideología. Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada. Así como esta hizo lo único enteramente logrado que tenemos hasta ahora, y es la independencia, hará el orden necesario, implantará la jerarquía indispensable que la democracia ha malogrado hasta hoy, fatalmente derivada, porque esa es su consecuencia natural, hacia la demagogia o el socialismo [...]"



El 6 de septiembre de 1930, el general José Félix Uriburu llegó a la Casa de Gobierno escoltado por tropas y civiles.

a

Actividades

- ¿Qué hechos internacionales pueden ser considerados causas indirectas del golpe militar de 1930?
- ¿Qué hechos y procesos internos debilitaron la autoridad del segundo Gobierno de Yrigoyen y crearon condiciones para su caída?
- Imaginen cómo pudo haber sido la vida de la familia de inmigrantes de la obra de Florencio Sánchez, presentada en las páginas 28 y 29, entre los años 1916 y 1930.

La Primera Guerra Mundial

El estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, marcó el fin de una época de prosperidad económica y equilibrio entre los países europeos. Las tensiones generadas por la competencia entre las potencias imperialistas desembocaron en el enfrentamiento armado más amplio y grave de los que hasta entonces habían ocurrido. El incidente que desencadenó la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austro-húngaro, ejecutado por un nacionalista serbio el 28 de junio de 1914.

En Europa, los gobernantes y los jefes militares pensaron que iba a ser una guerra corta y limitada. Sin embargo, se prolongó en el tiempo y se extendió hacia una gran parte del mundo. Aunque comenzó y terminó en Europa, la guerra se desarrolló simultáneamente en el Cercano Oriente, en África, en las islas del Pacífico y en otras regiones.

La Primera Guerra Mundial —llamada por los contemporáneos la *Gran Guerra*— fue una guerra total porque comprometió todos los planos de la vida social de los países participantes. En esos países, el Estado asumió la dirección de la actividad económica y orientó la utilización de todos los recursos para satisfacer las necesidades de la guerra. Todas las actividades productivas se subordinaron a las prioridades militares, como la producción de armamento, de alimentos y de vestimenta para los ejércitos. Así, sus economías se transformaron en economías de guerra.



Durante la guerra, se emplearon diversos tipos de armas, entre ellas, los gases asfixiantes. Además, por primera vez, se utilizó la aviación. Por eso, hubo millones de soldados muertos. En la imagen, un destacamento de los servicios de sanidad de las tropas italianas en las trincheras, 1916.

El desarrollo de la guerra

Como consecuencia del sistema de alianzas establecidas entre los países europeos, el atentado de Sarajevo provocó una serie de declaraciones de guerra encadenadas. El Imperio Austro-húngaro declaró la guerra a Serbia. Rusia movilizó sus tropas porque era aliada de los serbios. A su vez, Alemania era aliada del Imperio y declaró la guerra a Rusia y a Francia. Finalmente, Gran Bretaña, que integraba la Entente Cordiale junto con Francia y Rusia, declaró la guerra a Alemania.

La guerra comenzó con el avance del ejército alemán sobre territorio francés. Los franceses resistieron los ataques y, desde fines de 1914, el frente de combate se estabilizó en una larga y desgastante guerra de trincheras.

Al mismo tiempo, Alemania intentó aislar a Gran Bretaña atacando a los barcos, en su mayoría estadounidenses, que llegaban a la isla con abastecimientos. En 1917, como respuesta a los bombardeos por parte de los submarinos alemanes a las naves estadounidenses, el Gobierno de Estados Unidos abandonó la neutralidad y entró en la guerra. Este fue un hecho decisivo, porque desequilibró las fuerzas de combate en favor de la Entente.

Por otro lado, tras el triunfo de la Revolución Rusa en ese mismo año, el Gobierno bolchevique firmó la Paz de Brest Litovsk con Alemania, y Rusia se retiró del conflicto.

Sin embargo, a pesar de haber firmado la paz con Rusia, Alemania no logró sostener los esfuerzos exigidos por la guerra. Cada vez le fue más difícil resistir las acciones convergentes de los aliados en el frente occidental y en los Balcanes. Finalmente, hacia fines del año 1918, Alemania y sus aliados fueron derrotados.

Los acuerdos de paz

El 28 de junio de 1919, cinco años después del atentado de Sarajevo, Alemania y los países de la Entente firmaron el Tratado de Versalles. Los vencedores consideraron que Alemania había sido la única causante de la guerra y, en consecuencia, le impusieron la obligación de pagar grandes indemnizaciones a los países aliados. Alemania perdió las provincias de Alsacia y Lorena, que quedaron en manos de Francia; algunos territorios prusianos fueron entregados a Polonia, que volvió a nacer como Estado independiente. Alemania, además, perdió sus colonias. Los aliados también firmaron tratados con Austria, Turquía, Bulgaria y Hungría.

Los acuerdos de paz originaron un nuevo mapa político europeo. El Imperio Austro-húngaro quedó desmembrado: Austria quedó definitivamente separada de Hungría. Se constituyeron los nuevos Estados de Checoslovaquia y Yugoslavia, y desapareció Serbia.

Europa antes de la Primera Guerra Mundial y después de esta



REFERENCIAS
1878 - Año de independencia



REFERENCIAS
1917 - Año de independencia

El nuevo mapa de Europa resultó insatisfactorio para los países derrotados y para muchas minorías nacionales que no lograron su autonomía política. Terminada la guerra, los países de Europa vivieron, durante largos años, serias dificultades y no lograron la reconstrucción de sus economías.

Más información

Las consecuencias económicas de la guerra y de la paz

La guerra debilitó seriamente a Europa, tanto en el plano económico como en el político, y dio origen a numerosos focos de inestabilidad. La destrucción física y la pérdida de población no fueron, sin embargo, los obstáculos más significativos que enfrentó la reconstrucción europea. Los mayores obstáculos para la reincorporación de Europa a la economía internacional fueron las consecuencias de los tratados de paz y las respuestas que estos provocaron en los distintos países.

Las nuevas formaciones territoriales generaron interminables problemas políticos, económicos y sociales. El nuevo orden territorial creó más problemas de los que resolvió y debilitó a Europa política y económicamente en una época en la que gran parte del continente ya se encontraba en la miseria debido a los esfuerzos de la guerra.

Abandonados a su suerte, muchos países se vieron obligados a reconstruir sus economías como pudieron: aumentaron los aranceles proteccionistas y devaluaron frecuentemente la moneda.

Los países de la Entente impusieron fuertes sanciones a Alemania: la pérdida de territorios, la desmilitarización, la ocupación de zonas clave y el pago de indemnizaciones.

Con el tiempo, los sucesivos Gobiernos de Alemania lograron que se redujeran las sanciones impuestas a su país por los tratados de paz.

Pero imponer a Alemania una tarea imposible y cargarla con la cláusula de culpabilidad provocó, en el pueblo alemán, un acentuado resentimiento contra los vencedores.

Derek Aldcroft: *Las consecuencias económicas de la guerra y de la paz (1919-1929)*. Adaptación.

a

Actividades

- Reunidos en pequeños grupos, redacten un informe que enumere los principales cambios ocurridos en el mapa de Europa después de la Primera Guerra Mundial. Averigüen a qué país pertenecen actualmente las provincias de Alsacia y de Lorena.
- ¿Qué opinión tiene Derek Aldcroft sobre los tratados de paz? ¿Cuáles fueron, según él, sus consecuencias más importantes?

La Revolución Rusa

Del imperio zarista al Gobierno provisional

A comienzos del siglo xx, Rusia era el país menos desarrollado de Europa. El zar Nicolás II Romanov era el soberano de una monarquía absoluta, y la principal actividad económica del país era una agricultura muy pobre y muy poco mecanizada. La mayor parte de la tierra pertenecía a los nobles, a la Iglesia y a la burguesía. Los campesinos, en cambio, vivían en condiciones miserables y, frecuentemente, protagonizaron movimientos para reclamar el reparto de las tierras.

Rusia tenía un escaso desarrollo industrial; por esta razón, los obreros no eran muy numerosos. Las fábricas estaban concentradas en las ciudades de San Petersburgo y Moscú. Descontentos por la situación económica y social, durante los últimos años del siglo xix y los primeros del siglo xx, la gran mayoría de los trabajadores rusos se organizaron colectivamente y adoptaron posturas revolucionarias.

En 1905, estalló una revolución organizada por grupos políticos opositores que exigían el establecimiento de una Constitución liberal y un régimen político parlamentario. La revolución fue rápidamente reprimida, pero tuvo importantes consecuencias políticas. El Gobierno concedió algunas reformas: creó un parlamento o Duma y

reconoció el derecho al sufragio a algunos sectores de la población, hasta entonces excluidos de la participación política. Pero, las reformas fueron sólo políticas; y no se registraron cambios en la situación de los obreros ni de los campesinos. El descontento persistió y, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se agravó aún más. Las sucesivas derrotas de los ejércitos zaristas provocaron la ruina de la economía nacional y aumentaron la miseria de la población.

En febrero de 1917, los obreros de San Petersburgo se declararon en huelga y organizaron manifestaciones de protesta. El Gobierno del zar ordenó la represión, pero los soldados se negaron a disparar contra el pueblo y se unieron a los manifestantes.

Los revolucionarios de 1905 habían creado una forma de organización propia: los consejos de obreros y de campesinos, conocidos como *soviets*. En 1917, se volvieron a organizar soviets de obreros, de soldados y de campesinos, que rápidamente se multiplicaron y extendieron por todo el territorio ruso. Como consecuencia del movimiento revolucionario, el zar tuvo que abdicar. Los dirigentes de los partidos políticos liberales se hicieron cargo de un Gobierno provisional, presidido por Alexandr F. Kerenski, uno de los dirigentes de la fracción más moderada del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, conocidos como los *mencheviques*.

La Revolución de Octubre

El Gobierno provisional no dio respuesta a los reclamos sociales. Además decidió que Rusia continuara participando en la guerra. Como consecuencia, el descontento de los soldados, de los campesinos y de los obreros aumentó, y cada uno de estos grupos sociales manifestó sus necesidades a través de diversas acciones. Los soviets de campesinos ocuparon y repartieron las tierras de los grandes propietarios, los soldados abandonaron el frente de combate, y los obreros ocuparon las fábricas.

Vladímir I. Uliánov, llamado Lenin, uno de los dirigentes del ala revolucionaria del Partido Obrero Socialdemócrata —conocidos como los *bolcheviques*— consideró que era posible el triunfo de una revolución social e impulsó la continuidad de la lucha revolucionaria.

En octubre de 1917, los bolcheviques —quienes al año siguiente adoptaron el nombre de *Partido Comunista*— derrocaron al Gobierno provisional y tomaron el poder.

Lenin encabezó el nuevo Gobierno —denominado *Consejo de los Comisarios del Pueblo*—, que tomó una serie de medidas revolucionarias. En primer lugar, Rusia se retiró de la guerra. Además, el Gobierno ordenó la distribución entre los campesinos de las tierras del zar, de la Iglesia y de la nobleza. Los dueños de las fábricas conservaron su propiedad, pero los soviets de obreros asumieron



Lenin hablando a los obreros de una fábrica en 1917.

El mundo de entreguerras

Entre 1918 y 1939, durante el denominado *período de entreguerras*, los países de Europa atravesaron situaciones económicas y sociales muy difíciles. Las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por la guerra fueron muy considerables. Además, la falta de proyectos de reconstrucción concertados entre los distintos países provocó dificultades adicionales.

Pero, entre los países de Europa, los Estados Unidos y la Unión Soviética, hubo importantes diferencias en relación con los daños sufridos, las estrategias que cada uno adoptó para superar la crisis y el grado de recuperación económica finalmente obtenido.



Durante el auge económico que vivió Estados Unidos en los años veinte, se registró un importante crecimiento de la rama de la construcción. Por entonces, en el centro de las ciudades, se edificaron numerosos rascacielos, destinados a oficinas, como los que aparecen en la foto de la ciudad de Nueva York. En los suburbios, se construyeron casas cómodas y elegantes para las familias de las clases medias.

Toda Europa registró pérdidas enormes, pero la gran derrotada fue Alemania: su economía estaba agotada y, además, las fuertes sanciones impuestas por los tratados de paz limitaron sus posibilidades de recuperación.

La crisis económica y social de posguerra también tuvo importantes consecuencias políticas. Por diferentes razones, dejaron de existir el Imperio Austro-húngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Ruso. Por otra parte, mientras los países vencedores conservaron la democracia liberal como régimen político, en Alemania e Italia, surgieron regímenes autoritarios.

En Rusia, luego de la victoria del Gobierno revolucionario en la guerra civil, se registró una exitosa recuperación económica como consecuencia de las reformas graduales impulsadas por Lenin, primero, y a través de la planificación económica centralizada, más tarde.

Estados Unidos, por su parte, desde el final de la guerra, se transformó en la primera potencia económica mundial. Esta nueva posición fue el resultado de la combinación de diversos factores: no se había combatido en su territorio, su producción había crecido a un ritmo acelerado para abastecer a los países de la Entente y era, además, el principal acreedor de los países europeos, ya que durante el conflicto les había vendido alimentos, armas y otros productos industriales y les había otorgado créditos.

Los Estados Unidos en la década de 1920

Durante la década de 1920, en Estados Unidos, se registró un crecimiento económico acelerado. El país fue gobernado sucesivamente por tres presidentes del Partido Republicano, Warren Harding, Calvin Coolidge y Herbert Hoover. Todos ellos consideraban que el Estado no debía intervenir en la economía y que Estados Unidos tenía que mantenerse al margen de los problemas internacionales.

Entre 1921 y 1929, se produjo un extraordinario desarrollo industrial. En las empresas, se generalizó el taylorismo; y la productividad aumentó considerablemente. Hubo un auge en la construcción, la industria eléctrica y en la automotriz. Las ventas y las ganancias de los empresarios aumentaron constantemente. El clima de euforia económica que se vivía llevó a los estadounidenses a pensar que la expansión no tenía límites y estimuló las actividades especulativas. Gran parte de la población del país invirtió sus ahorros en la compra de acciones de empresas industriales. También llegaron a la Bolsa de Valores de Nueva York —Wall Street— capitales provenientes de otras partes del mundo, en busca de los excelentes beneficios que otorgaba la especulación financiera.

La quiebra de la Bolsa de Nueva York

Sin embargo, el auge económico tenía bases débiles. Hacia fines de la década de 1920, la cantidad de productos industriales fabricados era mucho mayor de la que podía ser consumida. Se produjo entonces una crisis de superproducción. Esta crisis resultó acelerada y agravada por la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York. Como consecuencia de la compra desenfrenada de acciones, las inversiones financieras aumentaron mucho más que las inversiones productivas. El precio de las acciones subió y dejó de reflejar el crecimiento real de las empresas. Finalmente, el jueves 29 de octubre de 1929, llamado el *jueves negro*, se produjo la quiebra —o *crack*— de Wall Street como resultado de la ola de pánico que se apoderó de las personas que habían comprado acciones. Entonces, se registró una baja en las cotizaciones, y para evitar mayores pérdidas, los accionistas se apresuraron a ofrecer sus acciones en el mercado: en pocas horas, se vendieron 13 millones de acciones; y se licuaron las ganancias.

La pérdida de capitales y de ahorros provocó la caída de la demanda; en consecuencia, muchos empresarios industriales redujeron la producción, y otros directamente cerraron sus fábricas. A su vez, la disminución de la actividad económica produjo un enorme aumento del desempleo. Los salarios de los trabajadores descendieron significativamente. Muchos agricultores perdieron sus tierras porque no pudieron pagar sus deudas. La mayoría de los productores agropecuarios no lograron reunir el dinero necesario porque los precios de los productos agrícolas habían bajado aún más que los de los productos industriales.

Más información

El keynesianismo

En su obra *Teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero*, Keynes afirmó que la economía capitalista no tendía de manera automática hacia el pleno empleo de los factores productivos —el capital y el trabajo— y que no se podía esperar salir de la recesión a partir de la “acción automática” de las “fuerzas del mercado”. Desde su punto de vista, sólo la intervención del Gobierno podía conseguir que la economía volviera a una posición de pleno empleo. Sostuvo, además, que los capitalistas no debían considerar el pago de los salarios como un gasto sino como uno de los pasos necesarios para obtener futuras ganancias, ya que los asalariados gastan la mayor parte de su salario en comprar los bienes que producen las empresas. Por lo tanto, si el Estado y un número cada vez mayor de habitantes tienen ingresos suficientes para gastar en la compra de productos, los capitalistas tienen asegurada la realización de ganancias crecientes.

Ante la gravedad de la crisis y la falta de respuestas por parte del Gobierno, en las elecciones presidenciales de 1933, el pueblo estadounidense eligió al candidato del Partido Demócrata, Franklin D. Roosevelt. El nuevo presidente implementó un programa de reformas económicas y sociales conocidas como el *New Deal* (“Nuevo Trato”) que impulsó la intervención del Estado en la economía con el objetivo de reactivar la producción industrial y resolver el problema de la creciente desocupación. El Estado distribuyó subsidios a los desocupados, creó nuevos puestos de trabajo en la administración pública, desarrolló un programa de construcción de obras públicas y buscó un acercamiento con el movimiento obrero reconociendo la legalidad de todas sus organizaciones sindicales. Para resolver la crisis agraria, el Estado también otorgó subsidios a los agricultores, a cambio de que no explotaran todas sus tierras.

La crisis económica de la primera potencia industrial tuvo consecuencias en todo el mundo. Estados Unidos dejó de importar y, con esta decisión, exportó de inmediato la crisis a los demás países. Simultáneamente, se quebró el sistema financiero internacional el llamado *patrón oro* acordado para facilitar el intercambio comercial mundial. El período comprendido entre 1930 y 1932 fue conocido como la *Gran Depresión*.



El afiche *Un bien merecido descanso*, difundido en Estados Unidos en 1930, ironizaba sobre las consecuencias del desempleo.

a

Actividades

- ¿Qué efectos económicos esperaba producir el presidente Roosevelt a partir de la intervención del Estado en la creación de empleo público, el otorgamiento de créditos y subsidios a las empresas, y la provisión de bienes y servicios básicos a los desocupados?

Los efectos de la crisis económica mundial en América Latina

Luego de la Primera Guerra Mundial, las economías latinoamericanas exportadoras de productos primarios comenzaron a mostrar signos de crisis como consecuencia de la disminución de la demanda de materias primas y alimentos por parte de los países centrales.

La quiebra de Wall Street y la gran depresión que se extendió a lo largo de la década de 1930 agravaron la situación de las economías latinoamericanas. La demanda exterior de productos primarios decayó aún más. Con el objetivo de superar sus propios problemas económicos, los países centrales se propusieron limitar sus importaciones y autoabastecerse tanto de materias primas para las industrias como de

alimentos para la población. Con estos fines, algunos países industrializados intentaron incrementar la producción agropecuaria en sus propios territorios mediante el uso de fertilizantes, entre otras estrategias. En algunos casos —como en el de la industria textil—, también comenzaron a reemplazar algunas materias primas naturales por otras sintéticas. Por su parte, Gran Bretaña trató de abastecerse importando, exclusivamente, productos de sus dominios coloniales.

La crisis de las economías de los países periféricos se agravó porque, además de la reducción de los volúmenes exportados, se registró una fuerte caída de los precios internacionales de los productos primarios. Al mismo tiempo, para los países de América Latina, cada vez fueron más restringidas las posibilidades de obtener préstamos o inversiones de capital extranjero.



En 1936, el general Francisco Franco encabezó una sublevación militar contra el Gobierno republicano, establecido por la nueva Constitución de 1931, luego de la caída de la monarquía. Los franquistas (o falangistas) y los republicanos se enfrentaron en una cruenta guerra civil. Franco contó con el apoyo de Mussolini y Hitler. Los republicanos, muchos de ellos socialistas y comunistas, recibieron la ayuda de miles de voluntarios de todo el mundo que integraron las Brigadas Internacionales. En la imagen, un afiche de la asociación francesa Solidaridad Internacional Antifascista, que llama a apoyar la causa de los republicanos.

Europa después de la Primera Guerra Mundial

Después de la Primera Guerra Mundial, los regímenes políticos de los países europeos presentaban marcados contrastes.

Los países capitalistas vencedores en la guerra conservaron la democracia liberal como régimen político. En Rusia, la monarquía de los zares fue sustituida por un Gobierno revolucionario que estableció un régimen político denominado *dictadura del proletariado*, en el cual los ciudadanos eran representados ante el Estado, en su condición de obreros, por el Partido Comunista. En otros países de Europa, desapareció la democracia liberal y parlamentaria, y fue sustituida por regímenes autoritarios: estos fueron los casos de la dictadura militar de Francisco Franco en España, el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania.

El surgimiento de los regímenes autoritarios estuvo profundamente relacionado con la intensa crisis económica y social de posguerra. Los Gobiernos democráticos de España, Italia y Alemania no lograron ofrecer respuestas satisfactorias a las demandas de la sociedad y, de este modo, favorecieron el apoyo de importantes sectores sociales a las propuestas autoritarias.

Más información

El concepto de posguerra

Desde el punto de vista de la economía, la posguerra es el período que transcurre entre el final de una guerra y el momento en que los países beligerantes vuelven a alcanzar los niveles de producción que tenían antes del comienzo del conflicto. La duración del período de posguerra depende de muchos factores. Por ejemplo, la gravedad de los daños materiales y humanos sufridos, las políticas de reconstrucción que adoptó cada país, y si hubo o no ayuda internacional.

La reacción nacionalista y el final de la "década infame"

Después del golpe de 1930 y por más de una década, el Partido Socialista —dirigido por Nicolás Repetto, Alicia Moreau de Justo y Alfredo Palacios— y el Partido Demócrata Progresista —liderado por Lisandro de la Torre— denunciaron en el Congreso Nacional el fraude y la corrupción. Sin embargo, aceptaron las reglas del juego político impuestas por los conservadores y se limitaron a cumplir el papel de oposición parlamentaria. Por esta razón, no lograron presentarse ante la sociedad como una opción de cambio frente a los desprestigiados políticos conservadores.

Por su parte, la UCR, conducida por Marcelo T. de Alvear desde la muerte de Yrigoyen en 1933, prefirió establecer acuerdos con los conservadores antes que enfrentar con firmeza a los Gobiernos fraudulentos. Esta actitud le fue restando caudal electoral y provocó constantes enfrentamientos dentro del partido, del que se alejaron distintos grupos de militantes. Uno de los grupos radicales que se opuso al liderazgo de Alvear —quien falleció en 1942— fue la llamada *Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA)*, dirigida por Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz. FORJA denunció enérgicamente la influencia del imperialismo inglés en la economía y en la política argentina, se opuso al fraude y defendió una posición de neutralidad frente a la Segunda Guerra Mundial. La ideología nacionalista de los forjistas expresaba el creciente rechazo, por parte de vastos sectores de la sociedad argentina, a la tradicional alianza entre los grandes capitalistas locales y los británicos.

El 4 de junio de 1943, un nuevo golpe militar puso fin al Gobierno de Castillo, en medio de un clima social de descontento y de fuertes debates entre los simpatizantes de los Aliados y los del Eje nazi-fascista sobre la posición que debía sostener el país ante la guerra en Europa.

El golpe militar contra el Gobierno conservador contó con el apoyo de sectores muy diversos: nacionalistas, liberales, proaliados, proalemanes, radicales yrigoyenistas e, incluso, algunos dirigentes conservadores que advirtieron el agotamiento del régimen fraudulento. A diferencia del golpe de 1930, en el que los militares se convirtieron en el brazo armado de una coalición que buscaba restaurar el orden oligárquico, los golpistas de 1943 provocaron, de manera confusa y sin una ideología claramente definida, el final del orden conservador.

La gestión de los presidentes militares que se sucedieron desde 1943 estuvo atravesada por los enfrentamientos entre los distintos grupos de militares que habían apoyado el golpe. El general Pedro E. Ramírez asumió la presidencia, y durante su gestión, prevaleció el sector de ideas más autoritarias y conservadoras, que propuso entre otras iniciativas disolver los partidos políticos y establecer la educación católica obligatoria en las escuelas. Pero en febrero de 1944, Ramírez fue reemplazado por el general Edelmiro J. Farrell, que asumió como presidente de la República.

Por la Reintegración de Valores Morales

Este es, en Síntesis, el Programa de la Revolución que ha Triunfado



En la Casa de Gobierno, el pueblo se entera de la noticia de los hechos de la revolución del 4 de junio de 1943. El general Farrell, acompañado de los otros líderes militares, preside el momento de la toma de posesión del poder. A la izquierda, el general Farrell, presidente del gobierno, acompañado de los otros líderes militares de la revolución.

Nuestro Pueblo, Después de la Expectativa, Aclamó a los Jefes del Ejército Nacional

Comprenderemos después de un día de actividad normal, la calidad humana, que es un elemento de inspiración y dinamismo. "Según la tradición", así se vivió con fervor, como cuando se pelearon, aunque algunas manifestaciones, como el aplauso, fueron también de expresión de alegría. Como siempre la alegría, la espontaneidad, el entusiasmo, el amor de la patria, la gran alegría que se vive en estos momentos. Para la patria que es la esencia de la vida, el sentimiento de fraternidad.

En la mañana de hoy, en el momento de la toma de posesión del poder, el pueblo argentino, que es un elemento de inspiración y dinamismo, se manifestó con entusiasmo y alegría. Como siempre la alegría, la espontaneidad, el entusiasmo, el amor de la patria, la gran alegría que se vive en estos momentos. Para la patria que es la esencia de la vida, el sentimiento de fraternidad.

CABILDO 5
EL PUEBLO QUIERE SABER DE SUS TITANES

LEY MARCIAL EN TODO EL PAIS

El golpe militar del 4 de junio de 1943 puso fin a la llamada *década infame*, uno de los nombres utilizados para calificar al período de la historia argentina comprendido entre 1930 y 1943. En la imagen, primera plana del periódico *Cabildo* del día 5 de junio de 1943.

Más información

EL GOU

Unos meses antes del golpe de 1943, en el Ejército, se constituyó una agrupación militar, el Grupo de Oficiales Unidos (GOU), con el objetivo de llevar a cabo cambios institucionales en el país. Algunos de los integrantes de este grupo fueron los oficiales Juan Carlos y Miguel Montes, Emilio Ramírez, Enrique P. González y el coronel Juan Domingo Perón. Como consecuencia de las diferencias ideológicas que existieron en su interior, el programa del Gobierno del GOU no fue muy preciso. Su principal función fue expresar la opinión de los oficiales más jóvenes, partidarios de restablecer la disciplina dentro del Ejército y de recuperar al país de la corrupción.

a

Actividades

- ¿Por qué la práctica del fraude electoral beneficiaba a los grupos sociales que tenían mayor poder económico?

El peronismo (1943-1955)

Dos alianzas sociales enfrentadas

Entre los militares que organizaron el golpe de 1943, comenzó a crecer el liderazgo político del ministro de Guerra del presidente Ramírez, el coronel Juan Domingo Perón. En octubre de 1943, Perón fue designado, además, director del Departamento Nacional del Trabajo, desde donde inició una política de acercamiento hacia los dirigentes sindicales obreros. Las primeras medidas impulsadas por Perón fueron la derogación de las leyes que limitaban y reprimían la acción sindical, la reincorporación de los obreros despedidos y el cumplimiento de las 60 horas de trabajo semanales.

Un mes después, el Departamento de Trabajo fue elevado al rango de Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde allí, Perón estableció un conjunto de disposiciones que mejoraron sustancialmente las condiciones de vida de los trabajadores y su posición frente a sus empleadores. Estas medidas dieron respuesta a muchos de los reclamos por los cuales el movimiento obrero venía luchando desde principios de siglo. Entre ellas, las más importantes fueron la Ley de Despidos, que establecía que todo trabajador tenía derecho a percibir una indemnización proporcional a su antigüedad en caso de ser despedido sin causa; el establecimiento del seguro social y la jubilación, que benefició a dos millones de personas; el Estatuto del Peón, que fijó un salario mínimo y procuró mejores condiciones de habitación, vivienda y trabajo para los peones rurales; la creación de los Tribunales de Trabajo, cuyas sentencias, en líneas generales, fueron favorables a las demandas obreras; el establecimiento de mejoras salariales y el aguinaldo para todos los trabajadores. También, esta-

bleció el reconocimiento de las asociaciones profesionales, medida que significó un fortalecimiento jurídico de los sindicatos como organizaciones de representación de intereses.

Estas decisiones tuvieron un gran impacto sobre la sociedad y generaron la rápida adhesión a Perón de muchos trabajadores y dirigentes gremiales. Al mismo tiempo, también provocaron temor entre otros sectores que se preocuparon por el crecimiento del poder de los sindicatos.

Los empresarios de la UIA temían que la nueva legislación laboral provocara *indisciplina* en sus empresas, y los terratenientes nucleados en la SRA desconfiaban del *industrialismo* de Perón y consideraban el Estatuto del Peón como una intromisión del Estado en sus negocios privados. También se sumaron, a esta incipiente alianza antiperonista, grupos de profesionales y de estudiantes universitarios y casi la totalidad de los partidos políticos. El acercamiento entre Perón y los dirigentes sindicales profundizó la oposición, además, entre los oficiales nacionalistas y católicos más conservadores.

Los dirigentes de los grupos opositores organizaron la denominada *Junta de Coordinación Política*, que contó con el activo apoyo del embajador de los Estados Unidos, Spruille Braden. Esta alianza presionó al presidente Farrell para que entregara el Gobierno a la Corte Suprema de Justicia y, luego, convocara a elecciones nacionales.

El 8 de octubre de 1945, en el marco de una situación política cada vez más conflictiva, los sectores más conservadores del Ejército forzaron a Perón a renunciar a todos sus cargos. Unos días después, el coronel quedó detenido en la isla Martín García.



Damas de la alta sociedad saludan el paso de los manifestantes que participaron de la Marcha de la Constitución y de la Libertad.

El 19 de septiembre de 1945, unas doscientas mil personas recorrieron las calles de Buenos Aires, entre la plaza Francia y el Congreso, para exigir la convocatoria a elecciones.

La movilización obrera del 17 de octubre de 1945

Un sector de la sociedad argentina que pensaba que el movimiento que se estaba gestando bajo el liderazgo de Perón era similar al fascismo europeo consideró la detención del coronel como el paso previo hacia la democratización política. Para otros sectores, en cambio, la salida de Perón del Gobierno significaba una amenaza a las conquistas sociales logradas durante los dos años de su gestión al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Los dirigentes sindicales que apoyaban a Perón comenzaron a discutir la posibilidad de tomar medidas de lucha para exigir su liberación y asegurar la vigencia y profundización de las reformas sociales. Pero entre los dirigentes del movimiento obrero, existían desacuerdos sobre si debían apoyar o no a Perón.

Luego de una jornada de intensos debates en el local de la CGT, un grupo de dirigentes obreros tomó la iniciativa de declarar una huelga general y convocó a una movilización para el 18 de octubre. Esta decisión fue el resultado, sobre todo, de la presión ejercida por los trabajadores tucumanos de los ingenios azucareros (FOTIA) y por el sindicato de obreros de la carne de Berisso. Sin embargo, en los suburbios industriales de Buenos Aires, Rosario y La Plata, la movilización de los obreros desbordó las disposiciones de la central sindical. En la mañana del día 17 de octubre, un día antes de lo dispuesto por la CGT, grupos de trabajadores comenzaron a movilizarse en los principales centros urbanos del país.

Hacia el mediodía, nutridas columnas de obreros que manifestaban su adhesión a Perón y exigían su libertad confluyeron sobre la Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo que la concurrencia en la Plaza de Mayo crecía y se registraban acciones similares en el resto del país, durante toda la jornada, se realizaron numerosas reuniones y negociaciones políticas entre representantes del Gobierno, el representante de Perón y el Comité Nacional de Huelga, integrado por la dirección de la CGT y de sindicatos autónomos.

A medida que pasaban las horas, el Gobierno se vio obligado a ceder a las exigencias de Perón. La policía no dificultó la llegada de los grupos de obreros al centro de la ciudad; y entre los militares, no hubo acuerdo para sacar las tropas del Ejército a las calles y reprimir a los manifestantes.

Con la intención de poner fin a la movilización, el Gobierno concedió a Perón el uso de la radio oficial para difundir un mensaje; también se comprometió a formar un nuevo gabinete con hombres de confianza del coronel y a mantener la convocatoria a elecciones sin proscripciones.

Finalmente, en horas de la noche, desde los balcones de la Casa Rosada, Perón dirigió un mensaje a la multitud reunida en la Plaza de Mayo. En esa oportunidad, Perón utilizó la palabra *trabajadores* para dirigirse al pueblo que coreaba su nombre. El clima de movilización popular también estuvo presente en otras ciudades del país, como La Plata, Rosario y Córdoba. En las jornadas del 17 y el 18 de octubre, la presencia activa de los trabajadores en las calles de los grandes centros urbanos puso de manifiesto el surgimiento del peronismo como un movimiento de masas, con una clara identificación social y política.

A partir de entonces, el conflicto social entre las masas obreras, por un lado, y los sectores medios y la elite —integrada por los terratenientes, los grandes comerciantes exportadores y la gran burguesía industrial—, por otro, se expresó, además, como un conflicto político entre peronistas y antiperonistas.



Desde el 17 de octubre de 1945, las familias obreras tuvieron una presencia constante en las movilizaciones peronistas. Algunos antiperonistas denominaron despectivamente a los partidarios de Perón con el calificativo de *cabecitas negras* y caracterizaron la irrupción de las masas obreras en la política como un *aluvión zoológico*.

a

Actividades

- Reunidos en pequeños grupos, discutan cuál de las medidas tomadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión consideran que fue la más importante. Justifiquen su elección.
- Luego, respondan a la siguiente pregunta:
 - ¿Por qué los grupos de empresarios consideraron que estas medidas atentaban contra sus intereses?

El primer Gobierno peronista (1946-1952)

Desarrollo industrial y redistribución de la riqueza

En las elecciones realizadas en febrero de 1946, se impuso la fórmula Perón-Quijano, impulsada por el Partido Laborista, con el 52% de los votos. Los candidatos laboristas superaron por más de 260.000 sufragios a los candidatos del frente electoral llamado *Unión Democrática*.

Los objetivos de la política económica del primer Gobierno de Perón quedaron establecidos en el Primer Plan Quinquenal. A través de la planificación económica, el Estado peronista se propuso incentivar el desarrollo de la industria y, al mismo tiempo, crear las bases que permitieran una redistribución de la riqueza en favor de los asalariados, aumentando el nivel de empleo, elevando el poder adquisitivo de los salarios y mejorando las condiciones de vida de los trabajadores. Para alcanzar este último objetivo, una de las decisiones clave que tomó el Gobierno fue el aumento del gasto público en las áreas de educación, salud y vivienda.

El Gobierno se propuso profundizar el proceso de sustitución de importaciones de manufacturas industriales y, con este fin, fomentó el desarrollo de las ramas metalmecánica y metalúrgica liviana. Estas industrias comenzaron a producir artefactos para el hogar —la llamada *línea blanca*, como cocinas, heladeras, lavarropas, licuadoras, ventiladores y otros electrodomésticos— y orientaron su oferta al mercado interno.

El incentivo para crear nuevas industrias y ampliar las ya existentes, por medio de líneas de crédito accesibles, estaba profundamente relacionado con la expansión sostenida del consumo interno. A su vez, para lograr la ampliación del mercado interno, era necesario garantizar, simultáneamente, el aumento real de los salarios, el aumento de la capacidad de compra de los asalariados y un número cada vez mayor de trabajadores en condiciones de gastar su salario.

Con estos objetivos, el Estado llevó adelante planes de construcción de viviendas, hospitales y escuelas; a través de las obras sociales, la afiliación sindical y la expansión de planes de bienestar social, garantizó la satisfacción de las necesidades básicas a numerosos sectores de la población, sin que estos tuvieran que utilizar una parte de su salario para ese fin. De este modo, la población disponía de un mayor volumen de ingresos para gastar comprando los productos industriales, y el aumento de las ventas estimulaba a los empresarios a realizar nuevas inversiones.

Al mismo tiempo, el Gobierno llevó adelante la nacionalización de importantes sectores de la economía; entre ellos, los ferrocarriles, de propiedad británica; los teléfonos, adquiridos a la empresa estadounidense ITT; el gas; las empresas de navegación fluvial y de ultramar, y el transporte aéreo. Desde entonces, la provisión de estos servicios públicos pasó a ser responsabilidad directa del Estado.

Más información

Demócratas contra laboristas

Para las elecciones de 1946, los partidos políticos tradicionales formaron un frente electoral —llamado la *Unión Democrática*— que representó los intereses de los sectores capitalistas y de las clases medias. La UCR, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista, el Partido Comunista y diversas fuerzas conservadoras (excluyendo al Partido Demócrata Nacional, que no participó formalmente de la alianza, pero la apoyó decididamente) eligieron como candidatos de su fórmula presidencial a los radicales José Tamborini y Enrique Mosca. La Unión Democrática se presentó como la fuerza que defendía los valores democráticos frente al avance de lo que consideraban el *nazifascismo*.

En torno del liderazgo de Perón, se conformó una alianza social que aglutinaba a la gran mayoría de los trabajadores, a pequeños y medianos empresarios, y productores agrarios cuya producción estaba orientada hacia el mercado interno, y a sectores nacionalistas del Ejército. Ante la ausencia de una estructura política partidaria propia, la candidatura de Perón fue impulsada por el Partido Laborista, un nuevo partido obrero creado por dirigentes sindicales, que en su mayoría, provenían de la vieja corriente sindicalista.

El laborismo centró su campaña electoral en la presentación de Perón como el representante de los trabajadores, de la justicia social y como el defensor de los intereses nacionales frente al imperialismo norteamericano. Perón aprovechó la intromisión del representante del Gobierno de los Estados Unidos y lanzó la consigna "Braden o Perón".



Más información

El IAPI y la redistribución del ingreso nacional

El Estado peronista intervino de manera muy intensa en la actividad económica, estableciendo un fuerte contraste con las políticas liberales de los Gobiernos conservadores de décadas atrás. Uno de los principales instrumentos de intervención fue el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI). Por medio del IAPI, el Estado controló el comercio exterior, fijando los precios de las exportaciones agrícolas, regulando las importaciones y resguardando la producción nacional. El Estado fijaba los precios de los cereales y, de este modo, evitaba que la gran burguesía comercial y terrateniente —como los grupos Bunge y Born, y Dreyfus— manejara el mercado por medio de prácticas oligopólicas.

El IAPI permitió al Estado obtener un importante caudal de recursos que derivó hacia la industria y hacia la inversión social. De este manera, se produjo una transferencia de ingresos de los sectores agroexportadores hacia la burguesía industrial y los sectores populares urbanos.

La política social

El crecimiento económico registrado durante los primeros años del Gobierno peronista fue acompañado por una política social que mejoró las condiciones de vida del conjunto de los trabajadores y atendió las necesidades de los sectores más desprotegidos.

El fuerte incremento de la inversión del Estado en las áreas de vivienda y educación se materializó en la construcción de más de medio millón de viviendas y alrededor de 8000 escuelas. El acceso al sistema de educación pública de vastos sectores sociales, que hasta entonces sólo gozaban formalmente de ese derecho, provocó una fuerte reducción del analfabetismo, que quedó limitado al 3% de la población.

La acción social del primer Gobierno peronista estuvo liderada por la esposa de Perón, María Eva Duarte. *Evita* dejó de lado el pasivo y protocolar papel de primera dama y llevó adelante una intensa actividad pública; su acción contó con el apoyo de los sectores sindicales.

La actividad política de la esposa de Perón generó fuertes controversias en la sociedad argentina. Para los peronistas, se transformó en el símbolo de la justicia social. Para los trabajadores, fue *Evita, la abanderada de los humildes*. En cambio, sus enemigos políticos —a los que, en enérgicos discursos, calificó como *oligarcas y vendepatrias*— la llamaron despectivamente *la Eva*.

Para desarrollar sus planes de acción social, Eva Perón creó una fundación que le permitió establecer un contacto personal directo y cotidiano con los sectores sociales más necesitados.

La Fundación Eva Perón, creada en 1948 en reemplazo de la Sociedad de Beneficencia, desplegó una intensa actividad: atendía pedidos individuales, creaba hogares para niños y ancianos, centros educativos, colonias de vacaciones, policlínicos, ciudades estudiantiles, proveía de materiales a hospitales y escuelas, distribuía alimentos y construía viviendas populares.



En 1947, Evita fue designada presidenta de la Comisión parlamentaria pro sufragio femenino. La ley que reconoció a las mujeres argentinas el derecho al voto fue sancionada por el Congreso Nacional el 23 de septiembre de 1947. Las mujeres votaron, por primera vez, el 11 de noviembre de 1951. Por entonces, las mujeres socialistas llevaban más de tres décadas de lucha en pos de esta ley. En la imagen, mujeres peronistas en un acto presidido por Evita.

a

Actividades

- Identifiquen qué decisiones tomadas durante el primer Gobierno de Perón favorecieron el desarrollo de la industria nacional y qué decisiones permitieron la redistribución de la riqueza a favor de los asalariados.

El segundo Gobierno peronista (1952-1955)

A partir de 1949, el modelo industrialista y redistributivo del peronismo comenzó a sufrir algunas dificultades, que se agravaron en 1952. El crecimiento económico se detuvo, entre otras causas, por la caída de las exportaciones y por las malas cosechas y la liquidación de ganado como consecuencia de la sequía de 1951-52. La disminución de la entrada de divisas al país provocó, a su vez, la caída de la producción industrial; y se generó inflación.

La crisis económica agudizó las tensiones sociales y la lucha por la distribución de la riqueza: por medio de sus sindicatos, los trabajadores procuraron defender el nivel de sus ingresos, mientras que los empresarios se resistieron cada vez más a otorgar aumentos salariales.

Perón se propuso realizar algunos cambios en la orientación de la economía para atenuar los efectos de la crisis. Con este fin, dejó a un lado algunos aspectos de la política iniciada en 1946 y puso en marcha un programa de estabilización y mayor austeridad.

El Segundo Plan Quinquenal fue, en realidad, un plan de ajuste para detener la inflación y aumentar la producción por medio de la reducción del consumo popular, el congelamiento de precios y salarios —prolongando por dos años los convenios colectivos entre trabajadores y empresarios que ya estaban firmados—, el recorte de los gastos del Estado, los incentivos a la producción y la exportación agropecuaria, la apertura a la entrada de capitales extranjeros y la disminución de la presencia del Estado como empresario.

Los efectos de esta política tuvieron rápidos resultados: la inflación disminuyó, la actividad agropecuaria mejoró y, en general, la producción recuperó los niveles anteriores a la crisis. El apoyo de los sindicatos, que aceptaron firmar convenios colectivos de más largo plazo, y la buena cosecha 1952-53 contribuyeron a revertir la tendencia negativa.

Sin embargo, la tensión social se reavivó en 1954. Superada la recesión y concluida la tregua salarial, los sindicatos reiniciaron la lucha por la distribución del ingreso y desplegaron una intensa ola de huelgas.

Frente al fuerte activismo y a la unidad organizativa de los sindicatos de trabajadores, los empresarios presentaban un cuadro muy diferente: estaban divididos en fracciones con intereses y posiciones políticas enfrentadas. Las organizaciones representativas de la gran burguesía industrial se volcaron a una franca oposición cuando, en 1953, el Gobierno le quitó la personería jurídica a la UIA y sólo reconoció como representante de los empresarios a la Confederación General Económica (CGE), que nucleaba a los pequeños y medianos empresarios orientados hacia el mercado interno.



El 11 de noviembre de 1951, Perón fue reelegido presidente por segunda vez con el 62% de los votos. Ese día, fue celebrado por el pueblo peronista como el *Día de la Victoria*.

Más información

La Constitución de 1949

Una de las reformas políticas más importantes realizadas por el peronismo fue la sanción de una nueva Constitución nacional. El 25 de enero de 1949, luego de la convocatoria a elecciones, se reunió la Convención Constituyente. En ella, el peronismo tuvo una clara mayoría y estuvo en condiciones de imponer sus propuestas. Luego de dos meses de deliberaciones, se aprobó la nueva Constitución nacional.

En ella se incorporaron los derechos sociales conquistados por el movimiento obrero y la legalización de los cambios económicos, especialmente la política de nacionalizaciones del comercio exterior, de los combustibles y del transporte.

En el orden político, estableció la reelección presidencial y el voto directo en los comicios nacionales. La oposición se resistió a la nueva Constitución porque consideraba que era el resultado del afán personalista de Perón, ya que pensaba que su meta principal era lograr la reelección presidencial.

Además, los socialistas se quejaron porque, entre los derechos de los trabajadores, no figuraba el derecho de huelga; y los conservadores denunciaron el perfil excesivamente presidencialista de la reforma. La nueva Constitución finalmente fue aprobada y tuvo vigencia hasta la caída de Perón, en 1955.

El golpe militar de 1955

Durante la segunda presidencia de Perón, se agudizaron las tensiones entre los partidarios y los opositores del Gobierno peronista. La alianza social que se había unido en 1945 en torno a la Unión Democrática comenzó a reconstituirse; y el Gobierno, a pesar del masivo respaldo que recibió en las urnas, sufrió un progresivo desgaste. Hacia 1955, creció la oposición al Gobierno dentro de las Fuerzas Armadas —ya se había producido un intento de golpe militar en 1951—; y los sectores más conservadores de la Iglesia católica expresaron públicamente sus críticas al peronismo. Las voces opositoras se alzaron también entre la gran mayoría de los sectores medios —los más activos eran los estudiantes nucleados en la Federación Universitaria Argentina— y la alta burguesía ligada al capital local y extranjero, representada por la SRA, la Bolsa de Comercio y la UIA.

Al mismo tiempo, casi la totalidad de los partidos opositores, en particular, la UCR, formuló duras críticas al peronismo.

Fuera del marco legal, se produjeron levantamientos contra el Gobierno en diversas bases militares. El más grave sucedió el 16 de junio de 1955 e incluyó un bombardeo, en horas del mediodía, sobre la Plaza de Mayo, con el resultado de cientos de civiles heridos y muertos. Como respuesta, simpatizantes peronistas atacaron locales de partidos opositores e incendiaron iglesias, ya que consideraban a estos sectores como instigadores de un golpe militar contra el Gobierno.

Más información

El conflicto entre el Gobierno peronista y la Iglesia católica

Las buenas relaciones que habían caracterizado al primer gobierno de Perón con la iglesia católica —que se manifestaron, por ejemplo, a través del establecimiento de la educación religiosa en las escuelas estatales— se deterioraron en su segundo mandato. Fueron varias las razones por las cuales la Iglesia y el Gobierno se distanciaron. La creación de la Fundación Eva Perón provocó recelo en la institución eclesiástica, que consideró la acción social del Estado como competidora de sus obras de caridad. Se sumaron, además, una serie de medidas impulsadas por los diputados peronistas que la jerarquía eclesiástica no aceptó; entre ellas, la sanción —por primera vez en el país— del divorcio vincular, la eliminación de las discriminaciones públicas y legales existentes entre los llamados *hijos legítimos e ilegítimos*, y un decreto que eliminó definitivamente la educación religiosa en las escuelas del Estado. También se dejaron sin efecto los aportes del Estado a la enseñanza privada religiosa, como consecuencia de la sospecha, por parte del Gobierno, de que algunas instituciones realizaban manejos irregulares de esos fondos.

Estos hechos acentuaron aún más el clima de enfrentamiento político. El apoyo social al Gobierno quedó reducido a la CGE y a la CGT, que convocó por radio, en varias oportunidades, a los trabajadores a defender al Gobierno. Estos se movilizaron el 31 de agosto a la Plaza de Mayo y, en esa oportunidad, Perón pronunció un durísimo discurso, en el que remarcó la necesidad de defender las conquistas sociales a cualquier precio.

Finalmente, el 16 de septiembre de 1955, otro levantamiento militar —que se autodenominó *revolución libertadora*—, encabezado por el almirante Isaac Rojas y los generales Pedro E. Aramburu y Eduardo Lonardi, destituyó a Perón y estableció un Gobierno provisional. Perón salió del país y, durante los primeros tiempos, se exilió en el Paraguay.



El 31 de agosto de 1955, en el discurso que dirigió a la multitud reunida en Plaza de Mayo, Perón afirmó: “Hemos de restablecer la tranquilidad en el Gobierno, sus instituciones y el pueblo, por la acción del Gobierno, las instituciones y el pueblo mismo. La consigna para todo peronista, esté aislado o dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de ellos”. En la imagen, aspecto de un sector de la Plaza de Mayo después del bombardeo del 16 de junio de 1955.

a

Actividades

- *Conversen con algunos adultos, familiares o conocidos, que hayan vivido en la Argentina entre 1945 y 1955, y pídanles que les cuenten algunos recuerdos o anécdotas del enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas que se registró en esa época.*
- *Pregúntenles, también, cómo vivieron el golpe militar de 1955 y si estuvieron de acuerdo o no con la llamada revolución libertadora y por qué.*

Inestabilidad económica e ilegitimidad del sistema político (1955-1973)

La “revolución libertadora”: desperonización y resistencia (1955-1958)

El golpe militar que derrocó al Gobierno peronista en septiembre de 1955 contó con el apoyo de amplios sectores de la sociedad: la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas, los terratenientes y los comerciantes exportadores más poderosos agrupados en la SRA, los industriales de la UIA, gran parte de los sectores medios, los partidos políticos de la oposición y numerosos integrantes de la jerarquía de la Iglesia católica. Todos estos sectores coincidían en caracterizar al régimen peronista como una *dictadura totalitaria*. Por esta razón se sintieron identificados con el nombre de *revolución libertadora* que los militares golpistas dieron a la intervención que quebró el régimen democrático. Al mismo tiempo, todos ellos sostenían la necesidad de *desperonizar* la sociedad argentina y la de cumplir una etapa de reorganización política conducida por las Fuerzas Armadas, antes de la convocatoria a elecciones y el restablecimiento del régimen político democrático. Pero los jefes militares que habían derrocado a Perón tenían distintas estrategias para lograr la *desperonización*.

El primer presidente de la *revolución libertadora*, el general Eduardo Lonardi, había declarado que, en la Argentina posperonista, no había *ni vencedores ni vencidos*; sostenía que la desperonización debía lograrse a través de un “proceso de reeducación de las masas peronistas en los principios liberales y democráticos”, y era partidario de establecer acuerdos con algunos sectores del Gobierno depuesto.

A sólo dos meses de asumir el Gobierno, Lonardi fue desplazado por los sectores más liberales y antiperonistas de las Fuerzas Armadas, encabezados por el general Pedro E. Aramburu y el almirante Isaac Rojas, quienes asumieron como presidente y vicepresidente de la Nación. A partir de entonces, el Gobierno militar dictó varios decretos que tuvieron como finalidad desintegrar el peronismo como fuerza política y social. Además de la disolución del Partido Peronista, el presidente de facto decretó también la inhabilitación de todos los dirigentes políticos y gremiales que habían participado en el Gobierno

de Perón; y se confeccionaron listas de dirigentes, delegados y militantes que fueron encarcelados. La CGT fue intervenida, y las sedes de los sindicatos fueron controladas por las fuerzas de seguridad. También se suspendieron las convenciones colectivas de trabajo, medida que impidió que los trabajadores pudieran negociar mejoras salariales en un período en el que el poder adquisitivo de los salarios decaía a causa de la inflación. El Gobierno militar no definió con claridad un plan económico, pero tomó algunas medidas que favorecieron a los sectores capitalistas más poderosos: fueron eliminados los controles estatales a las exportaciones agropecuarias, se congelaron los salarios, y la Argentina se incorporó al Fondo Monetario Internacional.

Frente a la represión y la caída de los salarios, los trabajadores organizaron y protagonizaron acciones de resistencia. Muchos simpatizantes y militantes peronistas se nuclearon en los llamados *comandos de la resistencia*. Estos eran pequeños grupos que, poco después del golpe militar, surgieron en todo el país en forma espontánea y casi sin conexión entre sí. Los comandos de la resistencia más audaces comenzaron a organizar acciones clandestinas, como sabotajes a la producción en las fábricas, pintadas callejeras y colocación de explosivos de fabricación casera.

Poco a poco, estos grupos comenzaron a actuar de manera más coordinada, bajo la conducción de John William Cooke, que había sido diputado nacional; y a quien Perón, desde el exilio, nombró su delegado.

Más información

Los fusilamientos de junio de 1956

El 9 de junio de 1956, en varios sitios del país, estalló una rebelión armada peronista en la que participaron civiles y militares. La asonada —organizada por oficiales del VII Regimiento de Infantería de La Plata y la guarnición de Campo de Mayo— fue conocida por el Gobierno con anticipación y, al cabo de unas horas, fue aplastada. Aun así, el Gobierno militar aplicó la ley marcial. Treinta y ocho personas, civiles y militares, fueron fusiladas: el jefe del movimiento, el general Juan José Valle, en la penitenciaría de la calle Las Heras, y un grupo de civiles en un basural de José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires. Aramburu y Rojas asumieron públicamente la responsabilidad de esta decisión, que justificaron como indispensable para evitar intentos similares. A partir de estos hechos, los peronistas llamaron “revolución fusiladora” al gobierno militar presidido por Aramburu.

HOMENAJE A LOS COMPAÑEROS ASESINADOS POR LA OLIGARQUÍA EN JUNIO DE 1956



Un afiche del artista plástico argentino de la época, Ricardo Carpani.

El Gobierno de Frondizi (1958-1962)

El proyecto desarrollista

Hacia 1957, el Gobierno militar percibió que su proyecto de desperonizar la sociedad había fracasado. Las acciones de la resistencia continuaban, y resultaba evidente que las bases obreras mantenían su adhesión al peronismo. En las elecciones realizadas ese mismo año para elegir constituyentes y reformar la Constitución nacional, el peronismo fue proscrito, y los votos en blanco resultaron mayoritarios.

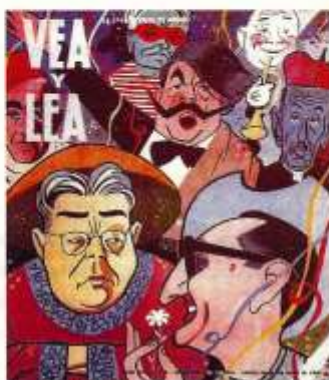
De todos modos, el Gobierno militar decidió convocar a elecciones generales para 1958. El permanente discurso de los militares y sus aliados civiles sobre sus intenciones democráticas dejó poco margen al Gobierno para permanecer en el poder por mucho tiempo más.

En febrero de 1958, la campaña electoral se polarizó entre los candidatos de las dos fracciones del radicalismo, que se había dividido poco tiempo antes en dos partidos: la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), liderada por Ricardo Balbín —que agrupaba a los sectores más antiperonistas que apoyaron con decisión al Gobierno de Aramburu—, y la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), que se fue distanciando de la revolución libertadora y, bajo el liderazgo de Arturo Frondizi, intentó un acercamiento con el peronismo.

Para asegurarse del triunfo electoral, Frondizi estableció un acuerdo con Perón, que vivía en el exilio: a cambio de que este ordenara desde el exterior que los peronistas votaran a la UCRI, Frondizi se comprometía, una vez en el Gobierno, a normalizar la actividad de la CGT, la CGE y los sindicatos, a permitir la participación de candidatos peronistas en las elecciones provinciales y a desarrollar una política económica que favoreciera la industria nacional y mejorara el nivel de vida de los trabajadores. Finalmente, Frondizi obtuvo el 49% de los sufragios, Balbín el 29%, y los votos en blanco alcanzaron el 8,5%.

Las primeras decisiones del presidente Frondizi fueron decretar un aumento de salarios del 60% e impulsar una ley de amnistía para que los peronistas pudieran legalizar sus organizaciones. En el plano económico, Frondizi se propuso aplicar una política desarrollista. Las bases de la propuesta desarrollista eran impulsar el desarrollo de la industria pesada —metalurgia, siderurgia y petroquímica— con el aporte de inversiones de capital y tecnología extranjeros. También proponía modernizar la producción agropecuaria a partir de la mecanización de las tareas rurales, con el objetivo de aumentar las exportaciones; este aumento, a su vez, estimularía la compra de las nuevas máquinas y herramientas fabricadas en el país.

La aplicación de la propuesta desarrollista originó un importante incremento de las inversiones extranjeras y un notable aumento en las pro-



Los candidatos para las elecciones presidenciales de 1958, según la revista *Vea y Lea*.

ducciones de acero, petróleo y automóviles. Sin embargo, el Gobierno no pudo evitar un proceso de fuerte inflación y serias dificultades en la balanza de pagos. Para resolver estos problemas, Frondizi convocó como ministro de Economía a Álvaro Alsogaray —representante del liberalismo económico más ortodoxo— y avaló la aplicación de un Plan de Estabilización. Los elementos centrales de este plan eran el congelamiento de salarios y la eliminación de la intervención del Estado en algunas áreas de la economía.

Pero la inflación no se detuvo, y estas medidas provocaron el empobrecimiento de los asalariados, una creciente desocupación y la progresiva concentración de la riqueza en manos de grupos de capitalistas nacionales y extranjeros.

Más información

La política petrolera

Una de las decisiones más polémicas de Frondizi fue la firma —en julio de 1958— de varios contratos con empresas petroleras de origen estadounidense que operarían por cuenta de YPF con el propósito de lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos. Antes de ser presidente, Frondizi había defendido una postura nacionalista en materia petrolera, afirmando que YPF tenía la capacidad suficiente para lograr el autoabastecimiento sin necesidad de financiamiento externo. Por esta razón, el cambio de posición generó una profunda pérdida de credibilidad hacia Frondizi por parte de su electorado y de la sociedad en general. Aun cuando, muy pronto, aumentó espectacularmente el volumen de petróleo producido y se logró el autoabastecimiento, la oposición denunció que el petróleo producido en el país por las concesionarias resultaba más caro que el importado y que el presidente se había negado a dar participación al Congreso en una decisión que afectaba la integridad del patrimonio nacional.

a

Actividades

- ¿Por qué la propuesta desarrollista de impulsar el desarrollo de la industria pesada beneficiaba a los sectores capitalistas y, al mismo tiempo, a los sectores asalariados?

Las presiones militares

Los problemas económicos, los conflictos con los sectores trabajadores y las polémicas que suscitaron el tema del petróleo y otras medidas gubernamentales —como, por ejemplo, las derivadas de la decisión de permitir a las universidades privadas expedir títulos habilitantes— generaron un clima social de malestar e incertidumbre.

La aplicación del plan de estabilización y el ajuste económico provocaron la ruptura de los acuerdos que el peronismo había establecido con Frondizi. El año 1959 fue uno de los momentos de mayor conflicto social. Los sindicatos combativos realizaron numerosas huelgas y reiniciaron otras medidas de protesta —como la ocupación de fábricas— que habían suspendido a partir del pacto entre Frondizi y Perón.

Frente al aumento del conflicto social, la respuesta del Gobierno fue la represión. Con ese fin, estableció el *Plan Conintes* (*Comoción Interna del Estado*), que permitía declarar zonas militarizadas a los principales distritos industriales, como La Plata y sus alrededores, y autorizaba allanamientos de sedes sindicales y detenciones de militantes y dirigentes gremiales opositores. Muchos gremios fueron intervenidos, y otros tantos protagonizaron extensas huelgas. Los bancarios, por ejemplo, paralizaron sus ta-

reas en señal de protesta por el despido de miles de trabajadores durante dos meses.

Aunque la política desarrollista favoreció a los sectores capitalistas más poderosos y el Gobierno recurrió a la represión para frenar los reclamos de los sindicatos, Frondizi recibió fuertes presiones por parte de las Fuerzas Armadas. Los militares cuestionaban al Presidente su política de acercamiento e integración hacia el peronismo, y algunas decisiones de política exterior que se oponían a los lineamientos dados por los Estados Unidos.

La crisis se agudizó en 1962, cuando Frondizi autorizó la presentación de candidatos peronistas en las elecciones a gobernadores y el peronista Andrés Framini ganó en la provincia de Buenos Aires. Los jefes militares hicieron un planteo a Frondizi, y el Gobierno anuló las elecciones e intervino las otras provincias en las que habían ganado los candidatos peronistas. Pero los planteos militares continuaron y, finalmente, forzaron a Frondizi a presentar su renuncia. El Gobierno nacional quedó entonces a cargo del presidente provisional del Senado, José M. Guido. Aunque Guido intentó presentarse como el continuador del orden constitucional, en los hechos, todas sus decisiones estuvieron bajo la tutela y el control de los sectores más antiperonistas de las Fuerzas Armadas.

Más información

Los capitales extranjeros

En noviembre de 1958, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 14780, que autorizó un nuevo tipo de inversión extranjera: la inversión extranjera directa (IED). Las nuevas condiciones para las inversiones de capital extranjero establecidas por la ley fueron las siguientes: los capitales extranjeros gozaban de los mismos derechos que las leyes acordaban a los capitales nacionales; las inversiones se podían utilizar para instar nuevas plantas o para ampliar las existentes; las ganancias anuales de los inversores extranjeros se podían transferir al país de origen sin previa autorización. La ley tuvo el impacto esperado y, entre 1959 y 1962, las inversiones de capital extranjero crecieron espectacularmente. Más del 60% de estas inversiones eran de origen estadounidense. El 66% del total se concentró en la producción petroquímica y en la fabricación de automotores y tractores.



El frigorífico Lisandro de la Torre tomado por los trabajadores.

El Gobierno de Illia (1963-1966)

En un contexto de aguda crisis económica y confusión política, agravada por el enfrentamiento entre dos sectores de militares—los llamados azules y los colorados—, el Gobierno convocó a elecciones generales en las que el peronismo continuó proscrito. Estas se realizaron el 7 de julio de 1963, y la Unión Cívica Radical del Pueblo obtuvo la mayor cantidad de votos: el 25% del electorado eligió la fórmula Illia-Peretti. La UCRI obtuvo el segundo lugar, con el 16%, y el porcentaje de votos en blanco alcanzó más del 19% se constituyó en realidad, en la segunda fuerza. Aun cuando una gran parte de la sociedad argentina vivió la asunción de Arturo U. Illia como la vuelta a la legalidad institucional, casi el 20% de votos en blanco significaba que el Gobierno iniciaba su gestión con una grave falta de representatividad de los intereses de importantes sectores de la población. Esta debilidad inicial atentó contra la estabilidad del Gobierno radical.

En su mensaje de asunción, Illia manifestó su propósito de impulsar el crecimiento económico y establecer una más justa distribución de la riqueza. También expresó su decisión de eliminar la desocupación, defender la moneda nacional y los salarios de los trabajadores, y sancionar un Código de Trabajo y Seguridad Social.

A poco de asumir, el Gobierno declaró nulos los contratos petroleros con empresas extranjeras firmados por Frondizi. Esta medida provocó malestar entre los sectores capitalistas de mayor poder económico y, desde entonces, fueron cada vez más frecuentes los enfrentamientos entre el Gobierno y los organismos financieros internacionales—el FMI y el Banco Mundial—. Por otra parte, la fuerte alza de los precios, la existencia de 750.000 desocupados y la liquidación de industrias, llevaron a la CGT a adoptar medidas de lucha.

A pesar de que el Gobierno de Illia no contaba con un plan económico claramente definido, el Estado profundizó su intervención en la regulación de la economía. Esta orientación fue duramente criticada por los sectores de empresarios más poderosos, quienes reclamaban la absoluta libertad de los mercados. Los grandes empresarios consideraban la intervención del Estado como una amenaza para sus intereses y, por este motivo, comenzaron a disminuir sus inversiones productivas. Esta decisión provocó un aumento de la desocupación en el sector industrial y agudizó aún más las tensiones sociales. En enero de 1964, la CGT aprobó un Plan de Lucha que alcanzó su punto más alto en el mes de mayo, cuando se registraron más de 10.000 establecimientos fabriles tomados pacíficamente por los trabajadores para defender sus derechos.

Frente a la ausencia de acciones contundentes por parte del Gobierno, en amplios sectores de la sociedad, se fue instalando la idea de que había un *vacio de poder*. A principios de 1966, los datos indicaban niveles récord en las exportaciones de trigo y en la producción de acero, el aumento del producto bruto interno y una mejora en la balanza de pagos. Sin embargo, una gran parte de la sociedad tenía la percepción de que la economía funcionaba mal. Se multipli-



BALBIN — No te pongas así, Arturo. Las huelgas se van a solucionar y la crecida del Paraná no fue culpa tuya...
ILLIA — No, no. No aguanto más. ¿Qué hace Onganía? ¿Dónde está Onganía?

Durante el Gobierno de Illia, algunos diarios y revistas participaron en una campaña de *acción psicológica* contra el Gobierno. Esta tenía como objetivos desgastar la figura del Presidente y sus funcionarios, crear en la sociedad una imagen favorable de Juan Carlos Onganía y generar consenso sobre la necesidad de un nuevo golpe por parte de las Fuerzas Armadas. Reclamaban que una *mano dura* impusiera *autoridad* para garantizar el *orden social y económico*. En la imagen, caricatura de Flax incluida en el N.º 170 de la revista *Primera Plana* (29 de marzo de 1966). En ella se lee: "Balbin: —No te pongas así, Arturo. Las huelgas se van a solucionar y la crecida del Paraná no fue culpa tuya...
Illia: —No, no. No aguanto más. ¿Qué hace Onganía? ¿Dónde está Onganía?".

caban las huelgas y los sabotajes, y comenzaron a generalizarse rumores sobre conspiraciones militares para derrocar al Gobierno. La sanción de una Ley de Medicamentos, que establecía preferencias para los laboratorios farmacéuticos de capital argentino frente a los extranjeros, llevó a estos últimos a participar activamente en el derrocamiento del Gobierno.

Finalmente, el 28 de junio de 1966, un golpe militar encabezado por los comandantes en jefe de las tres Fuerzas derrocó al Gobierno del presidente Illia, dispuso la disolución del Congreso Nacional, de las legislaturas provinciales y de los partidos políticos, y separó a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de sus cargos.

a

Actividades

- ¿A quiénes pudo haber representado el 20% de votos en blanco registrados en las elecciones del 7 de julio de 1963?
- ¿Qué relación pueden establecer entre la proscripción electoral del peronismo y los fuertes conflictos sociales que se registraron durante la gestión del presidente Illia?

El Estado autoritario de la "revolución argentina" (1966-1972)

El proyecto de despolitizar la sociedad

El 28 de junio de 1966, un golpe militar encabezado por el general Juan Carlos Onganía derrocó al Gobierno de Illia. Se inició entonces la autodenominada *revolución argentina*. Por primera vez, las tres Fuerzas actuaron unidas como corporación y no plantearon su intervención como transitoria. Por el contrario, se propusieron reorganizar la economía y la sociedad sobre nuevas bases hasta el punto de prohibir las actividades políticas, disolver todos los partidos políticos y eliminar los mecanismos de la democracia representativa. Esta nueva intervención militar contó con el apoyo de los terratenientes agroexportadores y los industriales más poderosos. Los empresarios esperaban que el Gobierno militar frenara las protestas sociales, objetivo que consideraban requisito indispensable para normalizar el funcionamiento de la economía y profundizar la industrialización.

La junta de comandantes en jefe designó al teniente general Juan Carlos Onganía como presidente de la República y avaló la reorganización del Estado con características fuertemente autoritarias. La dictadura de Onganía se propuso, además, poner en marcha un plan económico de orientación liberal.

El ministro de Economía, Adalberto Krieger Vasena, junto con un equipo de técnicos no vinculados con los partidos políticos tradicio-

nales, elaboró un Plan de Estabilización y Desarrollo, que contó con el decidido apoyo de los capitalistas más poderosos y de los organismos financieros internacionales, que otorgaron créditos al Gobierno. Aunque este consideraba que la marcha del plan era exitosa porque habían logrado controlar la inflación, muchos sectores sociales comenzaron a demostrar su descontento.

Los sectores asalariados de obreros y empleados se manifestaron en contra del Gobierno porque había limitado el poder político y económico de los sindicatos, embargando fondos, suprimiendo el derecho de huelga y estableciendo sanciones contra los obreros para asegurar una estricta disciplina en el lugar de trabajo. También, los empresarios de la CGE se opusieron al plan de Krieger Vasena, porque el congelamiento de los salarios, decidido por el ministro, reducía la capacidad de compra del mercado interno y, en consecuencia, se multiplicaban las quiebras de las pequeñas y las medianas empresas.

Por otra parte, las medidas cada vez más autoritarias del Gobierno de Onganía, como las clausuras y censuras en los medios de comunicación, la irrupción violenta en las universidades, la persecución y el encarcelamiento de militantes sindicales y políticos peronistas y de izquierda, y la detención de jóvenes por el sólo hecho de usar el pelo largo fueron generando un profundo malestar en la mayoría de la sociedad.

Más información

La Doctrina de la Seguridad Nacional

La Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) fue elaborada por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y de sus aliados de la OTAN, durante la década de 1960, en el contexto de la guerra fría y su enfrentamiento con el bloque soviético. En esos años, el gobierno de los Estados Unidos afirmaba que era indispensable evitar el *avance del comunismo* en los territorios que ellos consideraban parte del *mundo libre occidental*. Según la DSN, para garantizar este objetivo, las fuerzas armadas de cada país capitalista del Tercer Mundo debían concentrarse en eliminar a los "agentes del caos" y de la "subversión".

En la Argentina, desde 1955, los militares comenzaron a abandonar la denominada *Doctrina de la Defensa Nacional*, que consideraba una hipótesis de guerra la provocada por un enemigo externo a las fronteras nacionales. La DSN, en cambio, definía como hipótesis de conflicto el provocado por un *enemigo interno* y asignaba a los militares locales la tarea de vigilar las actividades políticas de la ciudadanía y reprimir las manifestaciones políticas de los ciudadanos consideradas *subversivas*, que eran todas aquellas que atentaran contra el orden capitalista.



Durante la llamada "Noche de los bastones largos", estudiantes y profesores universitarios fueron desalojados por la fuerza de las casas de estudio, que habían tomado en defensa de la autonomía de la universidad pública.

Resistencia social y apertura democrática

Las políticas que favorecieron la concentración de la riqueza producida por la industria y el autoritarismo del Gobierno de Onganía agudizaron los conflictos sociales. Ante el cierre de todos los canales de expresión y participación política, amplios sectores sociales se sintieron atraídos por el peronismo proscrito, al que identificaban como el principal movimiento de oposición al régimen militar. Desde mediados de la década de 1960, fue creciendo el número de militantes que participaron en acciones de resistencia de manera cada vez más coordinada y organizada. Como resultado de estas luchas, muchos militantes se fueron integrando en distintas agrupaciones que se identificaban con el nombre de Juventud Peronista.

Además de la radicalización política de los sectores juveniles, que se registró en los barrios de las grandes ciudades y entre los estudiantes en las escuelas y en las universidades, también se fueron alzando voces y acciones cada vez más críticas dentro del sindicalismo y de la Iglesia católica. En el movimiento obrero, los dirigentes y activistas sindicales más combativos se agruparon en la CGT de los Argentinos. La conducción de esta central obrera se diferenció de los dirigentes que habían optado por un línea más negociadora y moderada frente a los empresarios y el Gobierno. En el seno de la Iglesia católica, cobró fuerza una corriente de sacerdotes que declararon su *opción por los pobres* y formaron el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Los sacerdotes tercermundistas se opusieron a las políticas del Gobierno en favor de los grandes empresarios y también a la jerarquía eclesiástica, a la que acusaban de complicidad con el régimen militar.

Por esos años, en la sociedad argentina y en toda América Latina tenían una gran difusión algunos procesos revolucionarios internacionales, como las revoluciones socialistas en Cuba y China, la guerra que el pueblo de Vietnam sostenía contra los Estados Unidos y la lucha de Ernesto Che Guevara en Bolivia. En este contexto y ante la imposibilidad de reclamar a través de canales institucionales, algunos grupos de la sociedad argentina comenzaron a considerar los métodos revolucionarios y la lucha armada como una alternativa válida frente al régimen democrático, que había perdido legitimidad.

En el marco de este debate de ideas, algunas agrupaciones políticas que integraban la llamada *nueva izquierda* eligieron la lucha armada y se convirtieron en organizaciones guerrilleras. Entre las más activas, estaban Montoneros, de tendencia peronista, y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de tendencia marxista-trotskista, surgido de un partido de izquierda. Montoneros —que aglutinó a numerosos jóvenes que pensaban que el peronismo era un movimiento que debía luchar por una sociedad socialista— se propuso organizar un Frente de Liberación Nacional para enfrentar al imperialismo y a sus aliados locales.

En este contexto de creciente resistencia social, en mayo de 1969, estalló en Córdoba una insurrección popular que puso de manifiesto el fracaso del proyecto del Gobierno militar de despolitizar la sociedad y garantizar el orden que pretendían los grandes grupos económicos.



Durante el Cordobazo, las columnas de obreros avanzaron desde las plantas fabriles hasta el centro de la ciudad de Córdoba.

Luego del llamado *Cordobazo*, Onganía fue desplazado por un sector de las Fuerzas Armadas y, en su reemplazo, fue designado presidente el general Roberto M. Levingston, quien apenas logró mantenerse al frente del Gobierno durante diez meses. La agudización de los conflictos sociales en el interior del país y las luchas de las organizaciones peronistas, que reclamaban el fin de la proscripción de su movimiento y el regreso de Perón al país, provocaron un nuevo recambio en el Gobierno militar. En marzo de 1971, asumió la presidencia el general Alejandro A. Lanusse.

El último presidente de la *revolución argentina* comprendió que el único camino que le quedaba al régimen militar para descomprimir el clima de agitación social era buscar una salida electoral y lograr una *retirada ordenada* de los militares del Gobierno. En 1972, Lanusse convocó a elecciones nacionales en las que, por primera vez en dieciocho años, el peronismo no fue proscrito. De todos modos, con la intención de limitar el caudal de votos peronistas, Lanusse impuso un cláusula electoral que impedía a Perón presentarse como candidato. Los comicios se celebraron el 11 de marzo de 1973. El Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), una alianza controlada por el peronismo y que llevó como candidato a la presidencia al Dr. Héctor J. Cámpora, el delegado personal de Perón en la Argentina, triunfó con casi el 50% de los votos.

a

Actividades

- Revisen diarios de actualidad y busquen información sobre los principales conflictos sociales que atraviesan a la sociedad argentina contemporánea.
- Identifiquen qué grupos sociales los protagonizaron, cuáles son sus demandas y cuáles son las formas de lucha más habituales.
- Luego, comparen los conflictos actuales con los que se desarrollaron entre 1966 y 1972, e identifiquen similitudes y diferencias.

El retorno del peronismo (1973-1976)

De Cámpora a Perón

El triunfo electoral del FREJULI generó en amplios sectores de la sociedad la expectativa de que la Argentina iniciaba una etapa de *liberación* y de retorno de la *justicia social*, proclamada tradicionalmente por el peronismo. Los sectores más combativos del peronismo, a los que se identificaba como la Tendencia Revolucionaria, confiaban en que el nuevo Gobierno pondría en marcha un conjunto de cambios orientados hacia la construcción de la *patria socialista*.

Sin embargo, siguiendo las directivas de Perón, el nuevo Gobierno designó como funcionarios a dirigentes de los dos sectores que integraban el peronismo: el ala de izquierda, que incluía a los grupos revolucionarios que simpatizaban con Montoneros y la Juventud Peronista, y el ala de derecha, formada por los sectores más moderados y conservadores, cuyos máximos exponentes fueron el ministro de Bienestar Social José López Rega y algunos líderes sindicales.

La figura clave del nuevo Gobierno fue el ministro de Economía, José Ber Gelbard, un empresario que lideraba la CGE. Gelbard diseñó un plan económico cuyo principal objetivo fue la expansión de la industria nacional y una redistribución equitativa de la riqueza. Para poder llevar adelante esta política económica, el Gobierno propuso un acuerdo entre empresarios y sindicalistas que se denominó *Pacto Social*. Siguiendo los lineamientos de Perón, el Gobierno se propuso reorientar el tipo de industrialización que se venía desarrollando desde la presidencia de Frondizi. El Plan Gelbard alentó el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas orientadas hacia el mercado interno, limitó la libertad de los mercados —estableciendo precios máximos para los artículos de primera necesidad— y propuso una nueva ley de inversiones extranjeras con el



Imagen captada por la fotografía argentina contemporánea Sara Facio durante los funerales de Perón.

objetivo de revertir la fuerte influencia que tenía el capital extranjero en el mercado local.

En junio de 1973, Perón regresó al país y, a partir de entonces, los sectores de la derecha del movimiento iniciaron una ofensiva para desalojar del Gobierno a los funcionarios que simpatizaban con los grupos revolucionarios. Los conflictos internos del peronismo provocaron, finalmente, la renuncia de Cámpora y la convocatoria a elecciones. Perón se presentó como candidato del Frente Justicialista de Liberación; y su esposa, María Estela Martínez, fue la candidata a vicepresidenta. El 23 de septiembre de 1973, Perón obtuvo el 62% de los votos; y Ricardo Balbín, candidato de la UCR, el 21%.

Desde la presidencia, Perón intentó consolidar el pacto social entre la CGT y la CGE, y retomar plenamente el liderazgo político del movimiento peronista, cada vez más sumido en luchas internas entre sus alas de izquierda y de derecha.

La muerte de Perón, ocurrida el 1.º de julio de 1974, a los pocos meses de haber asumido la presidencia, provocó un fuerte vacío político y abrió el camino para que los sectores más conservadores del peronismo tomaran el control del Gobierno.

Más información

El regreso de Perón

El 20 de junio de 1973, Perón regresó definitivamente al país, dispuesto a consolidar el ordenamiento institucional y el programa económico puesto en marcha por el ministro Gelbard. Su llegada estuvo precedida por una gigantesca movilización popular que se dirigió al aeropuerto de Ezeiza. Se trató de la mayor movilización de masas de la historia argentina; y el número de asistentes —algunos lo calcularon en más de un millón— reveló la expectativa que gran parte de la sociedad había depositado en la figura de Perón. La presencia, en los alrededores de Ezeiza, de miles de personas movilizadas por las agrupaciones de la izquierda peronista, en un acto cuya organización estuvo a cargo de los sectores vinculados con la derecha del movimiento, concluyó con un elevado número de muertos y heridos. A partir de entonces, fue evidente que los conflictos en el interior del movimiento peronista no se resolverían a través de la negociación y que los sectores más conservadores no estaban dispuestos a compartir espacios de poder con los más radicalizados.

La crisis del Gobierno peronista

Luego de la muerte de Perón, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón asumió la presidencia. Desde entonces, se acentuó el proceso de derechización del Gobierno; y se agravó la crisis política.

Con el objetivo de eliminar la oposición social y política, el Estado organizó una política de represión ilegal, que fue llevada a la práctica, entre otros, por el grupo parapolicial conocido como la Triple A —Alianza Anticomunista Argentina (AAA)—.

Las acciones de la Triple A agravaron el clima de persecución y violencia. Fueron frecuentes las amenazas a figuras del campo de la cultura que habían declarado su adhesión a ideas de izquierda; por ejemplo, a través de la difusión de *listas negras* de futuras víctimas; además, se multiplicaron los asesinatos de dirigentes políticos y gremiales del peronismo revolucionario y del sindicalismo clasista y combativo. Al mismo tiempo, el Gobierno expulsó a los pocos funcionarios vinculados con la Tendencia Revolucionaria que todavía quedaban en la administración nacional y en algunas provincias.



Hacia fines de 1975, el Gobierno constitucional dictó un decreto que ordenaba a las Fuerzas Armadas "ejecutar las operaciones militares necesarias para aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país". En el marco del llamado *Operativo Independencia*, en el monte Tucumano, tuvieron lugar cruentos combates entre guerrilleros del ERP y tropas del Ejército al mando del general Antonio D. Bussi.

El ministro Gelbard, presionado por los sectores de derecha y por los empresarios más poderosos que no apoyaron su plan, fue forzado a renunciar. A partir de entonces, los pequeños y medianos empresarios de la CGE perdieron posiciones; y se fortaleció el sector de los capitalistas asociados al capital extranjero. En junio de 1975, el gobierno, controlado por López Rega, designó a Celestino Rodrigo como ministro de Economía, quien aplicó un plan de orientación liberal, como reclamaban los grandes grupos económicos. En contra de lo que había sido la tradicional política peronista, las nuevas medidas económicas —a las que, popularmente, se llamó *el rodri-gazo*— provocaron una fuerte transferencia de ingresos en favor de los exportadores agropecuarios y significaron un violento recorte del poder adquisitivo de los salarios.

La CGT, que hasta entonces había apoyado al Gobierno, declaró una huelga general por 48 horas y una movilización hacia Plaza de Mayo. La fuerte adhesión de la sociedad a estas acciones provocó las renuncias de López Rega y de Rodrigo.

La ofensiva sindical agudizó aún más la crisis política. El Gobierno, cada vez más aislado, decidió profundizar la política económica liberal y la acción represiva, medidas que reclamaban los grandes empresarios y los militares, preocupados por la *falta de orden*. Sin embargo, la incapacidad del Gobierno para dar respuesta a los problemas sociales, la multiplicación de los reclamos obreros y el retorno a la lucha armada por parte de las organizaciones guerrilleras crearon condiciones para que numerosos sectores de la sociedad argentina alentaran un nuevo golpe militar.

El reclamo de orden se extendió entre vastos sectores de las clases medias urbanas; y la gran mayoría de sus integrantes, implícitamente, apoyó la intervención militar. Por otra parte, ni los dirigentes sindicales ni los partidos políticos lograron articular un frente unido. Además, los medios de comunicación tuvieron gran influencia en la preparación de un clima favorable entre la opinión pública para el golpe militar. Finalmente, el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas quebraron, otra vez, el orden constitucional e impusieron una nueva dictadura militar.

a

Actividades

- Reunidos en pequeños grupos, identifiquen las diferencias y las similitudes más importantes entre las políticas desarrolladas durante los gobiernos peronistas entre 1946 y 1955 y las desarrolladas por los Gobiernos peronistas que se sucedieron entre 1973 y 1976.

La dictadura militar: terrorismo de Estado y concentración económica (1976-1983)

El golpe militar del 24 de marzo de 1976

El 24 de marzo de 1976, la junta de comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas—integrada por el general Jorge R. Videla, el almirante Emilio E. Massera y el brigadier Orlando R. Agosti—derrocó a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón y asumió el Gobierno del país. Los jefes militares denominaron *proceso de reorganización nacional* a la gestión que comenzaban, y Videla asumió como presidente.

Igual que en 1966, los sectores capitalistas y una gran parte de la población en general esperaban que, frente a la aguda crisis que atravesaba la sociedad argentina, el nuevo Gobierno militar reimplantara el orden y normalizara la economía. Muchos pensaron entonces que se trataba de un golpe militar similar a los que ya habían sucedido en el país. Sin embargo, hubo profundas diferencias entre las políticas y las metodologías llevadas a la práctica por los Gobiernos militares anteriores y las que aplicó la dictadura que tomó el Gobierno en 1976.

La Junta Militar disolvió el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes, y otorgó facultades legislativas al Poder Ejecutivo. También cambió la composición de la Corte Suprema de Justicia, de los tribunales superiores de provincia y declaró en comisión a todos los jueces. Los jefes militares no sólo suspendieron las funciones legislativas de las Cámaras de Diputados y de Senadores, sino que las reemplazaron por una Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL). La CAL estaba integrada por nueve oficiales—tres por cada arma—y se encargaba de redactar los decretos del Gobierno, a los que llamaron *leyes*.

A través de estas modificaciones en el régimen legal constitucional, desapareció la división de poderes del sistema republicano. La junta de comandantes concentró, de hecho, las facultades ejecutiva, legislativa y judicial del Gobierno; y quedó eliminada la posibilidad de recurrir a la justicia para impedir el ejercicio de un poder arbitrario por parte del Estado.

El Gobierno militar también suprimió los derechos civiles y las libertades públicas, y anuló las garantías constitucionales. Fueron suspendidas las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos. También suspendió los derechos y las garantías constitucionales de los trabajadores, como el derecho de huelga—acción para la que estableció una pena de hasta 10 años de prisión. La desarticulación de las organizaciones obreras—en particular de aquellas

cuyos dirigentes tenían posiciones más combativas—fue considerado un requisito necesario para la aplicación de un plan económico inspirado en los principios del libre mercado.

El Gobierno militar también estableció un duro control sobre los medios de comunicación y la vigilancia de todas las manifestaciones artísticas, con el fin de silenciar cualquier tipo de opinión o información considerada por el Gobierno como un peligro para el *orden social*.



La República ensangrentada, un dibujo del artista plástico Hermenegildo Sábat, realizado en conmemoración de los veinte años del golpe militar del 24 de marzo de 1976 y publicado por la revista *Realidad Económica*.



Tapa del diario *Clarín* del 26 de marzo de 1976.

El Estado terrorista

Desde 1976, el Estado controlado por los militares empleó sistemáticamente el terror desde las instituciones públicas y también desde estructuras clandestinas, creadas especialmente para llevar adelante la represión. A través de esta violencia institucional, las Fuerzas Armadas lograron desarticular la sociedad civil.

El *terrorismo de Estado* eliminó las organizaciones guerrilleras y el sindicalismo combativo, neutralizó la mayoría de las organizaciones populares y disuadió a los potenciales opositores.

Desde unos meses antes de dar el golpe, los jefes militares ya habían acordado que, una vez en el poder, iban a desarrollar una estrategia clandestina de represión y que los opositores debían ser no sólo *neutralizados* sino también *exterminados físicamente*.

Los militares consideraban que los detenidos políticos eran *irrecuperables*, razón por la cual no resultaba conveniente encarcelarlos legalmente —ya que se corría el riesgo, argumentaban, de que fueran amnistiados por algún futuro Gobierno—. De acuerdo con este razonamiento, organizaron el exterminio físico de los detenidos y la destrucción de las pruebas para evitar cualquier intento futuro de revisión de lo actuado.

Más información

El terrorismo de Estado

Terrorismo de Estado significa que el monopolio de la fuerza y la portación de armas que los ciudadanos consienten en un Estado de derecho —y que sostienen con el pago de los impuestos—, para que garantice la vigencia de sus derechos individuales, se vuelve en su contra. Es decir, el terrorismo de Estado comienza cuando el Estado utiliza sus Fuerzas Armadas contra los ciudadanos y —controlando la totalidad de las instituciones que dependen del Gobierno— los despoja de todos sus derechos fundamentales y, en algunos casos, también de la vida. El Estado se convierte en un terrorista cuando hace uso de la tortura, oculta información, crea un clima de miedo, margina al Poder Judicial, produce incertidumbre en las familias y confunde deliberadamente a la opinión pública. Frente a este Estado, los ciudadanos se sienten y, realmente, están totalmente indefensos y sujetos al arbitrio de la voluntad de quienes se han arrogado la autoridad. En estas condiciones, ser testigo, víctima o afectado por una acción del terrorismo de Estado crea confusión y parálisis.



Fueron muchos los estudiantes desaparecidos por la dictadura en todo el país. En la ciudad de La Plata, por ejemplo, entre el 15 y el 21 de septiembre de 1976, ocurrieron los hechos conocidos como *La noche de los lápices*. Durante esos días, siete adolescentes de un colegio secundario fueron secuestrados, y sólo uno de ellos sobrevivió.

En el Colegio Nacional de Buenos Aires, uno de los establecimientos educativos en los que había una gran actividad política y gremial estudiantil antes de 1976, la represión fue brutal. De la promoción que egresó en 1976, la más castigada por la represión, hay doce estudiantes desaparecidos.

En la imagen, un panel con fotografías de cinco de ellos, militantes de la Unión Estudiantes Secundarios (UES): Gustavo Juárez, Federico Martul, Gabriel Dunayevich, José Rosenblum y Norma Matsuyama.

Los grupos de tareas y los centros de detención clandestinos

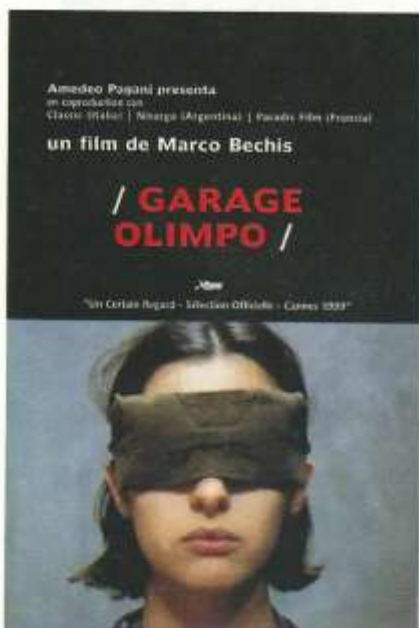
La metodología de represión planificada por la dictadura fue aplicada en todo el país de acuerdo con un plan sistemático, que seguía las órdenes de una cadena de mandos vertical, cuyo vértice era la junta de comandantes. Sin embargo, por su carácter ilegal y clandestino, los grupos operativos que realizaron la represión actuaron con relativa autonomía. Estas bandas de represores fueron llamados *grupos de tareas*. La modalidad de acción clandestina de estos grupos —extremadamente violenta y sin ningún límite— tenía el efecto de provocar en la población un terror aún mayor que un operativo legal y, consecuentemente, neutralizaba cualquier tipo de reacción defensiva.

La función de los grupos de tareas era capturar a los ciudadanos a quienes los servicios de inteligencia —la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), entre otros— identificaban como *guerrilleros*, *izquierdistas*, *activistas sindicales* o, más genéricamente, *zurdos*. El grupo de tareas los secuestraba y los recluía en un *centro de detención clandestino* o *chupadero*, que por lo general,

funcionaba en una comisaría, un establecimiento militar o un edificio acondicionado a tal efecto. En estos centros, los detenidos eran torturados para que proporcionaran información que permitiera realizar nuevas detenciones.

Los centros de detención clandestinos funcionaron como verdaderos campos de concentración y exterminio. En la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, funcionó un centro de detención especializado en la lucha contra los Montoneros. Allí, los secuestrados eran mantenidos con vida durante meses, hasta que los secuestradores recibían la orden de realizar su *traslado*. A partir de esta orden, el detenido era asesinado; y su cadáver era ocultado en una fosa común sin identificación, como NN, o incinerado, o arrojado vivo desde un avión al Río de la Plata o al océano Atlántico, luego de recibir una droga que lo inmovilizaba. De este modo, se consumó la *desaparición* de miles de detenidos.

Los grupos que comenzaron a organizarse para defender los derechos humanos de las víctimas de la represión empezaron a denominarlas *desaparecidos*.



La película *Garage Olimpo*, estrenada en 1999, mostró el funcionamiento del aparato de exterminio de opositores montado por la dictadura militar. La trama de la película recreó la vida y la muerte en uno de los centros clandestinos de detención que había en la Ciudad de Buenos Aires, al que los militares llamaban *El Olimpo*, porque allí ellos eran los *dioses* que decidían sobre la vida y la muerte de los detenidos.



El triunfo de la selección argentina en el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978 fue utilizado políticamente por el Gobierno de la dictadura militar a través de la manipulación de una pasión popular.

En 1986, el periodista deportivo —que escribía en *El Gráfico* y también en *Humor*— Osvaldo Ardizzone revisó aquellos días: "Después, recién después, fuimos descubriendo la oscura trastienda [...]. ¿El éxito del fútbol? Vano trofeo que más palidecía, tristemente, frente a la magnitud de los crímenes, de las persecuciones, del despilfarro en los gastos que exigió el torneo. A veces, uno hasta piensa que sería digno, inclusive, eliminar aquel trofeo de las vitrinas de nuestros orgullos deportivos...".



a

Actividades

- Conversen con sus familiares y otros adultos sobre cómo era su vida cotidiana durante los primeros años de la dictadura militar.
- Redacten una síntesis de las entrevistas realizadas.

El plan de Martínez de Hoz: el abandono de la industrialización y la apertura de la economía

La Junta Militar designó ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz, un representante del neoliberalismo estrechamente relacionado con los organismos y centros financieros internacionales. El ministro también contó con el apoyo de los empresarios capitalistas que concentraban el mayor poder económico en la Argentina.

El plan presentado por Martínez de Hoz, el 2 de abril de 1976, proponía reinsertar la Argentina en la economía mundial como productora de bienes primarios, agropecuarios y mineros, y abandonar la profundización de la industrialización como eje de la economía.

El equipo de economistas neoliberales consideraba que, para lograr sus propósitos, era necesario controlar la inflación y atraer inversiones de capitales extranjeros. Con este último objetivo y en un contexto de gran disponibilidad de dinero en el mercado internacional, el ministro anunció una serie de medidas que significaron la completa liberalización del mercado financiero. Como consecuencia de esta medida, se multiplicaron los bancos y las entidades financieras; y crecieron espectacularmente los depósitos a interés. La reforma financiera favoreció la especulación; es decir, gran parte de los capitales que antes se invertían en la producción y el consumo comenzaron a invertirse, solamente, para obtener más dinero.

Pero el plan de Martínez de Hoz no logró contener la inflación: en diciembre de 1977, el índice de precios minoristas había aumentado un 160,4% en relación con el de diciembre de 1976; y a fines de 1978, un 169,8% también en relación con esa fecha.

El equipo económico decidió entonces la *apertura de la economía*, que significaba facilitar el ingreso de los productos importados mediante la disminución o la eliminación de los aranceles que estos productos debían pagar. De este modo, esperaba controlar el aumento de los precios de los productos nacionales enfrentándolos con los precios del mercado internacional, que eran más bajos, y así, frenar la inflación.

La combinación de estas medidas produjo un explosivo aumento del endeudamiento externo e incentivó las operaciones financieras a muy corto plazo y alta rentabilidad, desalentando completamente las inversiones productivas. Finalmente, en 1980, el sistema financiero entró en crisis y, desde entonces, la inflación y la especulación crecieron hasta niveles muy superiores a los registrados anteriormente. Esta crisis fue originada por el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, el consecuente aumento del precio del dólar y la dificultad de hacer frente a las obligaciones en esa moneda.

Al mismo tiempo, por medio de esta política económica, la dictadura militar removió las bases de la industrialización sustitutiva de importaciones que se venía desarrollando desde 1930. El abandono de la ISI como motor del desarrollo económico del país y la apertura de la economía originaron profundas transformaciones en la estructura del empleo y de los salarios. En general, los salarios

fueron mucho más bajos que antes de 1976 y, como consecuencia de la inflación, perdían día a día su capacidad de compra. Esta situación afectó los niveles de ingresos con los que la población contaba para satisfacer sus necesidades básicas. La política económica de la dictadura militar redujo, además, el gasto social que el Estado realizaba en las áreas de educación, salud y bienestar social.

Entre 1976 y 1983, se registró una constante expulsión de mano de obra en el sector industrial como consecuencia del cierre de numerosas empresas que no pudieron competir con los productos importados. Si bien creció el número de los empleados en los sectores de la construcción y de servicios, cada vez fue mayor el número de trabajadores *por cuenta propia* —sin relación de dependencia con las empresas— o que mantenían una relación de *empleo precario*, es decir, sin estabilidad ni beneficios sociales. Entre los comerciantes, también creció el número de *trabajadores autónomos*.



Videla y Martínez de Hoz en una caricatura de Sábato. El jefe del Ejército y el ministro de Economía expresaron la alianza entre las Fuerzas Armadas y los grupos de capitalistas más poderosos.

a

Actividades

- Identifiquen tres medidas de la política económica aplicada a partir de 1976.
- Luego, identifiquen qué grupos sociales se beneficiaron con esas medidas y cuáles se perjudicaron con cada una y por qué.

Viola presidente: crisis económica y aumento de la deuda externa

En marzo de 1981, en medio de una fuerte crisis económica y de reacciones opositoras por parte de numerosos sectores de la sociedad civil, Videla fue reemplazado por el general Viola como presidente, y Martínez de Hoz dejó el Ministerio de Economía.

La crisis financiera originó una masiva fuga de divisas hacia el exterior porque los capitalistas y los pequeños ahorristas —en montos muy diferentes— cambiaban sus pesos por dólares y retiraban sus capitales del país. Estas operaciones financieras también fueron realizadas por numerosos especuladores que habían cometido delitos económicos para obtener cuantiosas sumas de dinero.

Frente a esta situación, el nuevo equipo económico, encabezado por el ministro Lorenzo Sigaut, mantuvo la completa libertad que regía para realizar las operaciones financieras y cambiarias, y siguió respondiendo con las reservas existentes en el Banco Central a la creciente demanda de dólares. Para contrarrestar la disminución de las reservas, continuó tomando créditos en el exterior. La combinación de estas operaciones produjo un explosivo aumento de la deuda externa: hacia finales de 1981, la deuda neta del sector público había aumentado cuatro veces su volumen en comparación con el monto registrado a fines de 1979. La creciente dificultad y posterior imposibilidad para hacer frente a las obligaciones y

pagar los préstamos contraídos en el exterior y sus intereses desembocaron en la llamada *crisis de la deuda*.

Por medio de diferentes mecanismos, la dictadura militar legalizó enormes sumas que, entre 1976 y 1982, fueron utilizadas para la especulación y maniobras fraudulentas, incluyéndolas en la deuda externa pública. También nacionalizó la mayor parte de la deuda contraída por el sector privado, aunque esta deuda no había beneficiado al conjunto de la sociedad. En 1982, el FMI presionó al Gobierno militar para que el Estado argentino garantizara el pago de la deuda. El presidente del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo, firmó entonces una disposición según la cual una gran parte de la deuda que tenían los empresarios privados fue incluida en la deuda pública, responsabilidad del Estado.

Hacia fines de 1983, la mayor parte de la deuda pública que había contraído la República Argentina y que, por lo tanto, debía ser pagada con la riqueza producida por el conjunto de los argentinos, no había sido destinada a inversiones públicas o gastos sociales que beneficiaran a toda la sociedad, sino que había beneficiado a una pequeña porción de los sectores capitalistas de mayor poder económico y, también, a especuladores y delincuentes económicos.

Martínez de Hoz y Jorge Wehbe, que se desempeñó como ministro de Economía durante la última etapa de la dictadura militar. Tapa de la revista *Humor*, septiembre de 1982.



La sociedad civil frente a la dictadura: entre la resistencia y el consentimiento

El movimiento obrero

A partir del 24 de marzo de 1976, el Gobierno militar suspendió la actividad gremial y prohibió el derecho de huelga, ilegalizó la CGT y las 62 Organizaciones, e intervino centenares de sindicatos.

La mayoría de los dirigentes sindicales que tenían una actitud combativa frente a los empresarios y la dictadura fueron duramente perseguidos. Miles de dirigentes intermedios y militantes fueron secuestrados y asesinados. En cambio, la mayoría de los dirigentes de línea moderada o *dialoguista* —la llamada *burocracia sindical*— fue acusada de corrupción y enviada a prisión. Este plan represivo buscó quebrar las bases de las organizaciones obreras, atomizando sus organizaciones y buscando entre la dirigencia sindical colaboradores con los cuales organizar un gremialismo dócil y adicto al régimen.

Como respuesta a las reformas laborales y a la política económica de Martínez de Hoz, la mayoría de las organizaciones gremiales opuso una activa resistencia. Desarrollaron huelgas y otro tipo de luchas en los lugares de trabajo. Sin embargo, la gran mayoría de las luchas fueron de carácter defensivo, como consecuencia de la brutal ofensiva que el Gobierno y los empresarios habían desarrollado, desde marzo de 1976, para eliminar las principales conquistas de los trabajadores y limitar la influencia de los sindicatos en la vida política del país. Las reivindicaciones defensivas comprendían el mantenimiento de los niveles salariales y las condiciones de trabajo, y el cuidado frente a las represalias empresariales en contra de los dirigentes y las organizaciones gremiales.

Los partidos políticos

Durante la dictadura militar, los partidos políticos atravesaron situaciones muy diferentes. Muchos dirigentes y militantes del peronismo de izquierda y de diversos partidos de izquierda fueron secuestrados y luego asesinados; otros tuvieron que exiliarse.

Muchos dirigentes del peronismo —y también del radicalismo— fueron encarcelados por acusaciones de malversación de fondos y corrupción. Pero, al mismo tiempo, hubo dirigentes del radicalismo, de la democracia progresista y del socialismo democrático que intentaron un acercamiento con los militares e, incluso, ocuparon cargos diplomáticos y funciones en intendencias de muchas ciudades del país.

Los dirigentes de los partidos políticos de orientación conservadora —habitualmente calificados como *de derecha*— brindaron un apoyo decidido a la dictadura. Entre estos, se encontraron el liberal Álvaro Alsogaray, un convencido defensor de la represión, y el líder del Partido Federal, Francisco Manrique. También apoyaron a la dictadura varios partidos provinciales conservadores, ligados a las familias tradicionales y a los poderosos grupos económicos locales.

Al mismo tiempo, durante la dictadura militar, se registró un importante proceso de renovación en el interior de la UCR, impulsado por Raúl Alfonsín, líder del Movimiento de Renovación y Cambio (MRyC). Después de la muerte de Balbín, en 1981, Alfonsín se consolidó como líder del radicalismo.



Teatro Abierto

Teatro Odeón

Teatro Margarita Xirgu

octubre
noviembre/1982

Buenos Aires
Argentina

"Teatro Abierto en un país cerrado". Esta fue la frase que orientó al movimiento conocido como *Teatro Abierto*, lanzado en 1981, que reunió a importantes autores, directores y actores de teatro en una serie de funciones que convocó a un numeroso público. Las obras presentadas rompieron con cinco años de censura y silencio. Poco antes del estreno, la sala del teatro Picadero fue incendiada intencionalmente. Los organizadores anunciaron que no tenían miedo y el evento cultural se transformó en una manifestación contra la dictadura militar.

Los organismos defensores de los derechos humanos

El sábado 30 de abril de 1977, a las 11 de la mañana, un grupo de catorce mujeres se reunió en la Plaza de Mayo con el propósito de solicitar una audiencia al general Videla. Querían saber cuál era la situación de sus hijos, que habían sido detenidos ilegalmente y de los que no habían tenido ninguna noticia desde ese momento. Videla no recibió a las madres de los desaparecidos, pero este encuentro fue el punto de partida de la *Asociación Madres de Plaza de Mayo*, que comenzó a nuclear a quienes reclamaban por la "aparición con vida de los detenidos-desaparecidos".

La irrupción de *las Madres* fue la primera respuesta pública de la sociedad civil a la represión de la dictadura militar. En esos momentos en los que la actividad de los grupos de tareas era fuerte y sistemática, el reclamo de las Madres fue realizado casi en total soledad. Por mucho tiempo, no fue conocido por la mayoría de la sociedad argentina, porque los medios de comunicación no informaban sobre su existencia y porque vastos sectores de la población preferían no enterarse de la matanza que se desarrollaba a su alrededor. La presencia de algunos medios de prensa del exterior, que recogieron su testimonio, brindó a las Madres cierta protección para encontrarse en *la Plaza*. También contaron con la ayuda de algunos sacerdotes que les permitieron reunirse en sus iglesias.

Además de las Madres, también se formaron otras organizaciones que agruparon a personas que estaban directamente afectadas por la represión, como los *Familiares de Detenidos y Desaparecidos por razones políticas* y las *Abuelas de Plaza de Mayo*. Estas últimas se dedicaron a rastrear el paradero de sus nietos, muchos de ellos secuestrados junto con sus padres o nacidos en los centros de detención clandestinos.

El reclamo de los familiares de las víctimas fue acompañado por el de otros organismos defensores de los derechos humanos que ya existían antes de 1976 —como el *Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ)*, el *Movimiento Ecueménico por los Derechos Humanos*, la *Asamblea Permanente por los Derechos Humanos* y la *Liga Argentina por los Derechos del Hombre*— y otros que se crearon, como el *Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)*, fundado en 1980.

Todas estas organizaciones, en las que participaban abogados y otros profesionales, religiosos, gente vinculada con la cultura, desde distintas posiciones político-ideológicas y utilizando diferentes consignas, prestaron su colaboración para realizar denuncias, recopilar datos sobre las acciones represivas, publicar solicitadas en el país y en el exterior, y brindar asesoramiento jurídico-legal.

De este modo, el movimiento que iniciaron las Madres fue incluyendo otros sectores de la sociedad civil.



La lucha de las Madres en la Plaza de Mayo: pañuelos blancos y los retratos de sus hijos detenidos-desaparecidos.

a

Actividades

- Vuelvan a leer el relato presentado en las primeras páginas del capítulo y redacten un texto que exprese la opinión personal de cada uno de ustedes sobre cuál fue el impacto que la metodología de represión clandestina tuvo sobre las familias de los detenidos-desaparecidos en particular y sobre la sociedad argentina en general.
- Busquen información sobre cuáles son los objetivos que, en la actualidad, se plantean las Madres de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos.

La crisis de la dictadura: de la guerra de Malvinas al llamado a elecciones

En diciembre de 1981, el comandante en jefe del Ejército, Leopoldo E. Galtieri, desplazó a Viola y asumió como presidente de la República. Este hecho puso de manifiesto el agravamiento de las tensiones en el interior de las Fuerzas Armadas como consecuencia de la agudización de la crisis económica.

Al mismo tiempo, algunos partidos políticos y algunas organizaciones sindicales comenzaron a organizar acciones de protesta. El 30 de marzo de 1982, la CGT convocó a una movilización en todo el país contra el régimen militar. Esta fue duramente reprimida por la policía con un saldo de varios detenidos, muchos heridos y un jubilado muerto a tiros en Mendoza.

En este contexto de aumento de la tensión política y social, el 2 de abril, Galtieri anunció la ocupación de las Islas Malvinas. Esta decisión estaba relacionada con objetivos estratégicos orientados a asegurar la soberanía argentina en el Atlántico Sur. Pero en los primeros meses de 1982, los militares suponían que la recuperación de las islas generaría la adhesión de la población y brindaría una nueva legitimidad política al Gobierno militar, cada vez más cuestionado. La decisión fue apoyada por la mayoría de los partidos políticos y del movimiento obrero, aunque todos estos sectores aclararon que su acuerdo con la recuperación de las islas no cambiaba su oposición a la dictadura militar. La multitud que se reunió en la Plaza de Mayo el 2 de abril expresó consignas nacionalistas y antiimperialistas, pero también exigió cambios en la política económica.

Las Fuerzas Armadas argentinas siempre consideraron improbable que el Gobierno británico intentara recuperar militarmente unas islas tan lejanas a su territorio y que parecían no tener un claro interés económico. Sin embargo, para el Gobierno conservador

inglés de Margaret Thatcher, también resultaba conveniente un triunfo militar que fortaleciera su posición política interna. Los militares argentinos confiaron, además, en que, en caso de un enfrentamiento armado, las fluidas relaciones que la Argentina tenía con el gobierno de Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, asegurarían, por lo menos, la neutralidad de ese país en la guerra. Pero el Gobierno de Estados Unidos privilegió su alianza con Gran Bretaña, también integrante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Como consecuencia de estos errores de apreciación, el Gobierno militar no previó un plan de defensa de las posiciones alcanzadas luego del desembarco en las islas. En los días posteriores al 2 de abril, un clima de euforia se generalizó en el Gobierno, en los medios de comunicación y entre una parte considerable de la ciudadanía.

Pero luego de algunas semanas, la llegada de los buques de guerra británicos a las islas hizo evidente que los ingleses consideraban que tenían poco para negociar con el Gobierno argentino. Luego de recuperar sin mayores dificultades las islas Georgias, a principios del mes de mayo, los británicos comenzaron el ataque militar contra las Islas Malvinas.

Sin embargo, en la Argentina, el clima de euforia aumentaba: siguiendo instrucciones oficiales, los medios de comunicación informaban sobre el desarrollo del conflicto bélico como si se tratara de un campeonato de fútbol. Se organizaron colectas, programas de solidaridad con las tropas en lucha y una activa campaña, en la que participaron diversos sectores políticos, para esclarecer a la opinión pública internacional sobre la legitimidad de la posición argentina en la guerra.



Monumento a los caídos en la guerra de las Malvinas, situado en la Plaza General San Martín, en la Ciudad de Buenos Aires.

A comienzos del mes de junio, los partes de guerra oficiales comenzaron a tener un tono más cuidado. Las bajas de los inexpertos jóvenes conscriptos ascendían a decenas. La infraestructura de combate era considerablemente inferior a la tecnología bélica de los ingleses, y las condiciones alimentarias de los soldados argentinos eran pésimas.

La aviación obtuvo algunos éxitos parciales, pero el desarrollo de la guerra preanunciaba la derrota argentina. El sentimiento de la población transitó, en esos días, desde la euforia hasta la desmoralización. Los partes oficiales y los medios de comunicación lentamente informaron la verdad sobre lo que estaba ocurriendo.

Días antes de la rendición incondicional de las tropas argentinas ante las británicas, el papa Juan Pablo II llegó a la Argentina. Con anterioridad, el Papa había visitado Inglaterra. Su arribo al país fue interpretado por muchos como un esfuerzo de Juan Pablo II para convencer a los jefes militares de la inconveniencia de proseguir la contienda y, además, para preparar el ánimo de los argentinos para aceptar la derrota.



Galtieri saludando a la multitud reunida en la Plaza de Mayo, el 2 de abril de 1982.

El 14 de junio de 1982, las tropas argentinas se rindieron incondicionalmente. Al día siguiente, Galtieri convocó a la población a la Plaza Mayo con el propósito de anunciar la rendición y realizar un balance del conflicto. La multitud que ocupó la Plaza repudió a la dictadura militar y también criticó la irresponsable conducción de la guerra por parte de los militares. Los partidos políticos de la oposición —peronistas, radicales y sectores de izquierda— hicieron responsables a los militares de haber utilizado la excusa del conflicto para frenar las presiones sociales y mantenerse en el poder. También, criticaron la falta de una correcta evaluación de la situación internacional y la actitud negligente con la que los comandantes militares habían enviado a la muerte a jóvenes conscriptos sin experiencia de guerra, mal alimentados y con armamentos de dudosa efectividad. El 15 de junio, la concentración en Plaza de Mayo terminó con una violenta represión de las fuerzas de seguridad contra todos los presentes.

La derrota en Malvinas provocó una profunda crisis en el régimen militar. El desgaste del Gobierno se aceleró, y Galtieri renunció en julio de 1982. La oposición política y social reclamó entonces el fin de la dictadura, la convocatoria a elecciones y la aparición con vida de los detenidos-desaparecidos por la dictadura militar.



Tapa de la revista Gente, 7 de mayo de 1982.



Publicidad de la revista Somos, publicada en junio de 1982.

a

Actividades

- En diarios y revistas de la época, busquen información sobre el papel de los medios de comunicación durante el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978, el Campeonato Mundial Juvenil de Fútbol de 1979 y la guerra de Malvinas. También, pueden realizar entrevistas a personas que hayan vivido esos episodios.
- Organicen la información recopilada y elaboren una conclusión sobre el tema.

La retirada de la dictadura

La rendición de las tropas argentinas aceleró la crisis política del régimen militar. En un clima de fuerte desprestigio, se agudizaron los enfrentamientos entre los jefes militares, que no tenían una posición unificada sobre cuáles debían ser los tiempos y la forma de la transición política. Los comandantes de la Marina y de la Fuerza Aérea, que eran partidarios de nombrar un presidente civil, se retiraron de la Junta. El nuevo comandante del Ejército, el general Cristino Nicolaides, nombró entonces presidente al general Reinaldo Bignone, quien propuso un acuerdo global con los partidos políticos.

La cuestión central que preocupaba a las Fuerzas Armadas era lograr que los partidos políticos aceptaran no revisar "lo actuado por los militares durante la guerra antisubversiva". Con este objetivo, en noviembre de 1982, el Gobierno presentó un documento que incluía quince temas sobre los que las Fuerzas Armadas consideraban necesario negociar para "concluir la institucionalización del país". Algunos de estos temas estaban relacionados con la estrategia de los militares de clausurar el pasado: estos eran *la lucha contra el terrorismo, los desaparecidos, el conflicto de Malvinas y la investigación de ilícitos*.

En un primer momento, la gran mayoría de los dirigentes políticos se mostraron dispuestos a negociar la transición según los términos planteados por los militares. Pero frente al aumento de la movilización de la sociedad, cada vez más preocupada por las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura militar, y las luchas de las organizaciones que reclamaban la "aparición con vida de todos los detenidos-desaparecidos", los partidos políticos —que habían conformado la *Asamblea Multipartidaria*— endurecieron su posición frente a los militares y, finalmente, rechazaron la propuesta de *clausurar el pasado*. Tanto Ítalo A. Lúder como Raúl Alfonsín —los principales referentes del Partido Justicialista y la UCR, respectivamente— declararon que no admitirían ningún tipo de condicionamiento por parte de los militares.

En la multitudinaria marcha del 16 de diciembre de 1982, predominaron duras consignas antidictatoriales que acusaban a los "milicos asesinos" y pedían "perdón para todos los milicos que vendieron la Nación". Cuando los manifestantes ocuparon la totalidad de la Plaza de Mayo, la policía lanzó gases lacrimógenos y se lanzó sobre la multitud con sus caballos. Desde un automóvil, fuerzas de seguridad sin uniforme balearon a un manifestante, el trabajador Dalmiro Flores, que cayó muerto frente al Cabildo.

La movilización popular contra la dictadura

La debilidad política del Gobierno militar luego de su derrota en Malvinas facilitó la movilización de diversos sectores de la sociedad civil. Durante los meses posteriores a junio de 1982, los sindicatos nucleados en la CGT convocaron a un paro general para el día 6 de diciembre, que contó con una amplia adhesión por parte de la población. Unos días después, el 10 de diciembre, los organismos defensores de los derechos humanos realizaron una Marcha de la Resistencia, en la que reclamaron la "aparición con vida de los desaparecidos". El 16 de diciembre, la Asamblea Multipartidaria convocó a una jornada nacional de movilización contra la dictadura, que se denominó la *Asamblea de la civilidad* y que concluyó con la *Marcha del pueblo por la democracia y por la reconstrucción*. Esta movilización fue la más importante desde 1976: unas cien mil personas confluyeron sobre la Plaza de Mayo en Buenos Aires. En la marcha participaron partidos políticos; organismos de derechos humanos; sindicatos; numerosas agrupaciones estudiantiles, vecinales y culturales; y gran cantidad de personas que se movilizaron en forma independiente.

El alto grado de movilización alcanzado en diciembre de 1982 puso de manifiesto que una gran parte de la sociedad había perdido el miedo provocado por la represión de la dictadura militar y estaba dispuesta a hacer realidad las consignas más coreadas el 16 de diciembre, como "se van, se van y nunca volverán" o "se va a acabar esa costumbre de matar".



Las elecciones de 1983

La movilización y los disturbios del 16 de diciembre aceleraron los tiempos políticos. En el mes de febrero de 1983, Bignone se vio obligado a establecer un cronograma electoral y fijó el 30 de octubre de 1983 como fecha para los comicios, a pesar de que no pudo lograr que los partidos aceptaran clausurar la revisión del pasado.

En el mes de abril, el Gobierno dio a conocer el llamado *Documento Final*. Con el objetivo de terminar con las "secuelas de la lucha antisubversiva", en ese documento, las Fuerzas Armadas declaraban que "los desaparecidos estaban muertos". El documento fue rechazado por la mayoría de las organizaciones políticas y sociales, incluida la Iglesia. También el Papa condenó el documento militar; y este hecho contribuyó a que el episcopado argentino emitiera una condena, venciendo la oposición de los obispos más cercanos a la dictadura. Alfonsín reclamó que fuera "la Justicia" y no sólo "la Historia" quien se encargara de revisar el pasado, y también denunció la existencia de un pacto sindical-militar para tender un manto de olvido sobre la actuación militar entre 1976 y 1983.



En los últimos tramos de su campaña, Raúl Alfonsín cerraba los actos pronunciando, junto con todos los presentes, el Preámbulo de la Constitución Nacional y afirmaba que "Con la democracia se come, se cura y se educa...". Al mismo tiempo, la Juventud Radical pintaba en las calles la leyenda "Somos la vida". Con estas consignas, fuertemente ligadas a los derechos individuales, sociales y políticos y con su imagen de cohesión, orden y democracia internos, la UCR presentó ante el electorado un conjunto de características deseables en un partido político que debía gobernar en el difícil primer período democrático posterior a la dictadura. En la imagen, Alfonsín con su gesto característico durante la campaña electoral de 1983.

Con estos hechos, Alfonsín inició su campaña electoral, diferenciándose de las actitudes más prudentes del justicialismo y asumiendo el discurso más duro de oposición a la dictadura. Los radicales se presentaron como los portavoces de los valores democráticos y de la libertad política. Esta propuesta tan amplia e imprecisa permitió a la UCR aglutinar una gran mayoría electoral, pero también puso de manifiesto su debilidad programática.

El peronismo, por su parte, sumido en un complicado proceso de disputas internas entre diversos sectores, eligió como candidato a Líder, representante de la tendencia moderada.

Los resultados de las elecciones del 30 de octubre estuvieron marcados por una gran polarización del electorado: la UCR obtuvo aproximadamente 7.500.000 votos (el 52%); y 5.700.000 (el 40%), el PJ. El triunfo de un candidato radical sobre uno peronista en elecciones sin proscripciones sorprendió a gran parte de la sociedad. Los militares adelantaron la fecha de traspaso del Gobierno y, en un clima de euforia, que se vivió en las calles y plazas de todo el país, Raúl Alfonsín asumió la presidencia el 10 de diciembre de 1983.



Videla, Viola, Galtieri y Bignone, "las viudas del proceso", según el título de un dibujo de Sábato, publicado en *Clarín* después de las elecciones del 30 de octubre de 1983.

a

Actividades

- Reunidos en pequeños grupos, discutan la siguiente cuestión:
 - La dictadura militar iniciada en 1976, ¿logró todos los objetivos que se había propuesto? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no?
- Redacten un texto que presente las conclusiones del grupo.

El Gobierno de Alfonsín (1983-1989)

La lucha política por los derechos humanos: avances y retrocesos

El juicio a las Juntas Militares

El 10 de diciembre de 1983, Alfonsín asumió como presidente de la República; y la sociedad argentina inició el retorno a la democracia. Pero el nuevo régimen político democrático no tuvo las mismas características que había tenido antes de 1976. Los casi ocho años de dictadura habían producido importantes modificaciones en la sociedad y en el Estado, que se reflejaron en todos los planos de la vida social argentina.

El principal problema que debió enfrentar el Gobierno radical desde un principio fue la cuestión de la violación de los derechos humanos por parte de la dictadura y la subordinación de las Fuerzas Armadas al nuevo orden constitucional. Los principales actores de esta lucha política fueron los militares, los dirigentes de la UCR y los organismos de derechos humanos.

La estrategia de Alfonsín para resolver la cuestión de las violaciones de los derechos humanos estuvo orientada a lograr que los militares se autojuzgaran. El Presidente esperaba que las propias Fuerzas Armadas sancionaran a quienes habían violado los derechos humanos y, al mismo tiempo, que los militares depuraran sus instituciones y se reinsertaran en la vida democrática.

Con esta meta, el Gobierno ordenó el arresto de los comandantes de las tres primeras Juntas Militares y la persecución de los principales líderes guerrilleros. De este modo, pretendió igualar las

responsabilidades de los grupos guerrilleros y del terrorismo de Estado, de acuerdo con las ideas de la denominada *teoría de los dos demonios*, que propone que tanto los guerrilleros como los militares tuvieron igual responsabilidad por la violencia de la época.

Los militares no aceptaron la oferta del Gobierno de autojuzgarse y, el 25 de septiembre de 1984, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas determinó que las órdenes sobre la represión de las Juntas Militares habían sido legítimas. La Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal asumió entonces la tarea de enjuiciar a las Juntas de la dictadura.

El fiscal federal Julio César Strassera llevó adelante la acusación contra los ex comandantes. El tribunal, presidido por el Dr. Andrés D'lessio, condenó, por unanimidad, a Videla y a Massera a prisión perpetua, a Viola le aplicó 17 años de condena, ocho años a Lambruschini y tres años y nueve meses a Agosti. Los demás miembros de las Juntas no fueron condenados por considerar que las pruebas presentadas no eran suficientes. El fallo fue celebrado por algunos sectores como un triunfo del poder civil sobre el militar, mientras que aquellos que se habían movilizado exigiendo "juicio y castigo a todos los culpables" lo recibieron con decepción, considerando que las condenas no habían sido lo suficientemente drásticas para los responsables del genocidio. Lejos de clausurar el tema de las violaciones de los derechos humanos, la condena aplicada a los ex comandantes reavivó la polémica.

Más información

La Conadep

En diciembre de 1983, Alfonsín ordenó la creación de una *Comisión Nacional para la Desaparición de Personas* —la Conadep— cuya misión era investigar qué había sucedido con las personas detenidas durante la dictadura militar y que continuaban desaparecidas.

Gracias a los testimonios de miles de personas, víctimas sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas y testigos ocasionales, la Conadep pudo reconstruir el pedazo de historia que los dictadores pretendieron borrar de la memoria de los argentinos. En su informe final, titulado *Nunca más*, la Conadep reunió un conjunto de testimonios probatorios de que la represión había obedecido a un plan sistemático, es decir, que no se trataba de "errores" ni de "excesos". Estos testimonios, además, fueron utilizados como pruebas que permitieron juzgar, inculpar y condenar a prisión perpetua a los jefes militares que ordenaron y ejecutaron las acciones represivas.



Una escena registrada durante el juicio a las Juntas Militares de la dictadura.

Las leyes de "Punto Final" y de "Obediencia Debida"

El 31 de diciembre de 1986, el Congreso aprobó una iniciativa del Gobierno, conocida como *Ley de Punto Final*, que fijaba una fecha tope para iniciar causas relacionadas con la represión ilegal. No obstante, y contrariamente a lo que se proponía el Gobierno, la determinación de una fecha límite para procesar a los ejecutores del terrorismo de Estado provocó el aumento del número de denuncias en juzgados de todo el país; también se aceleraron las presentaciones de pruebas. Para impedir el objetivo de la ley, las Cámaras Federales de Rosario, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca, La Plata, Tucumán y Comodoro Rivadavia suspendieron la feria judicial del verano y se abocaron a tratar los nuevos casos. El resultado fue que, en poco tiempo, quedaron procesados más de 300 oficiales.

Como reacción ante las numerosas citaciones para declarar ante la justicia, el 17 de abril de 1987, estalló una sublevación militar en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, liderada por el teniente coronel Aldo Rico. Los sublevados de la rebelión de Semana Santa —que fueron llamados *los carapintadas*— expresaron el descontento de muchos oficiales por el avance del poder civil sobre los militares y reclamaron una solución política para las causas penales que los involucraban.

Una masiva movilización popular en la Plaza de Mayo repudió el alzamiento carapintada y acompañó al Gobierno mientras duró la rebelión. El domingo de Pascuas al mediodía, luego de reunirse con el jefe sublevado, Alfonsín afirmó frente a la inmensa multitud "la casa está en orden". Aunque Rico y otros jefes militares fueron encarcelados, muchos sectores de la sociedad interpretaron esta actitud como la primera claudicación del poder civil ante los militares.

El 19 de abril, el Gobierno y los representantes de los principales partidos políticos suscribieron un Acta de Compromiso Democrático, en la que se establecieron distintos niveles de responsabilidad durante la represión ilegal, entre quienes habían dado las órdenes y los subordinados que las habían cumplido. Unos días después, el 13 de mayo, fue enviado al Congreso el proyecto de la *Ley de Obediencia Debida*, que resultó aprobada en Diputados con el voto de los legisladores del radicalismo y los partidos provinciales de ideas conservadoras.

a

Actividades

- Reunidos en pequeños grupos, discutan cuál fue la importancia histórica del juicio a los comandantes que habían integrado las juntas de Gobierno durante la dictadura militar, que se mantuvo en el poder entre 1976 y 1983.

Más información

La ruptura horizontal de la cadena de mandos

Los militares sublevados en Semana Santa reivindicaban la llamada *guerra antisubversiva* como justa y legítima. Se los llamó *carapintadas* porque, en los días del levantamiento, se mostraron con sus caras pintadas con betún. Pretendían, con esa actitud, demostrar que seguían en guerra y diferenciarse de la conducción militar —a quienes consideraban "generales de escritorio" y acusaban de haberse rendido en Malvinas y de haber abandonado a los oficiales medios a su suerte en los juicios por las violaciones de los derechos humanos—.

Mediante actos de rebelión, el amotinamiento, la sublevación y la toma y ocupación de unidades y establecimientos militares, a través de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza, expresaron una ruptura horizontal de la institución militar y atentaron contra la subordinación castrense al poder político y contra el orden institucional democrático.



Un aspecto de la movilización popular durante la Semana Santa de 1987.

La década neoliberal (1989-2001)

Las elecciones de 1989

En un clima de gran descontento social, la UCR y el Partido Justicialista llevaron adelante la campaña para las elecciones nacionales de 1989. La UCR había elegido como candidato presidencial al dirigente cordobés Eduardo C. Angeloz, que tenía un perfil más conservador que Alfonsín. Angeloz también aparecía como un candidato confiable para los sectores capitalistas, ya que su equipo de economistas era de orientación liberal y partidario de las privatizaciones. El peronismo eligió como candidato al gobernador riojano Carlos S. Menem, quien había logrado imponerse en las elecciones internas del Partido Justicialista a la línea renovadora de Antonio Cafiero.

En los comicios celebrados el 14 de mayo de 1989, la fórmula Menem-Duhalde obtuvo el 47,3% de los votos, contra el 32,4% del binomio radical Angeloz-Casella.

La agudización de la crisis y de la recesión productiva arrojó a millones de argentinos al hambre y a la desesperación. A fines de mayo de 1989, en Rosario, Córdoba, Tucumán y en algunas localidades del Gran Buenos Aires (Quilmes, Moreno y General Sarmiento), gran cantidad de trabajadores y desocupados —sin

conducción orgánica— se lanzaron sobre los supermercados para apoderarse de alimentos. Como respuesta a la crisis social, los legisladores radicales y peronistas votaron el estado de sitio y el gobierno ordenó la represión, que arrojó 14 muertos, 80 heridos y centenares de detenidos.

La entrega del poder al nuevo Presidente estaba prevista para el 10 de diciembre pero, en el contexto de la crisis económica y social, Alfonsín necesitaba un acuerdo con Menem para intentar sostener su frágil programa económico. El Presidente electo no le prestó ese apoyo; y esta decisión precipitó la salida de Alfonsín, quien el 12 de junio, en un mensaje dirigido a todo el país, anunció que resignaba la presidencia. Mucho antes de lo previsto, el 8 de julio de 1989, se realizó el traspaso del mando presidencial. Se trató de un hecho inédito en la historia argentina: por primera vez, un presidente constitucional entregaba el gobierno a otro —miembro de un partido opositor— luego de una elección transparente. Esta alternancia en el Gobierno entre las dos fuerzas políticas más importantes del país confirmó la tendencia bipartidista y fue un paso decisivo en la consolidación del régimen político democrático.

Más información

La campaña electoral de 1989

Angeloz y Menem desplegaron dos discursos de campaña contrapuestos. El candidato radical realizó actos masivos en los que anunció que utilizaría un "lápiz rojo con el que ajustaría la estructura del Estado" para facilitar la modernización de la economía. Presentó una prolija y detallada plataforma electoral en la que apelaba a la eficiencia y a la capacidad de gestión. Esta promesa de más ajuste se combinaba con publicidades televisivas en las que se sugería que un triunfo peronista significaría el retorno a un pasado violento. Menem, por su parte, desplegó una campaña con consignas simples —"Siganme, no los voy a defraudar"—, en las que prometió medidas, como *el salarizó y la revolución productiva*; pero evitó dar precisiones sobre su programa económico para alcanzar tales objetivos.



Carlos S. Menem y su compañero de fórmula Eduardo Duhalde, en 1989.